

CRISIS ALIMENTARIAS EN EL NORTE DE ÁFRICA

*Perspectivas e impactos para
España y la UE*

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

Documento de trabajo

No.220/2023

CRISIS ALIMENTARIAS
EN EL NORTE DE ÁFRICA



CRISIS ALIMENTARIAS EN EL NORTE DE ÁFRICA

*Perspectivas e impactos para
España y la UE*

Autora
Laurence Thieux

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

Documento de trabajo

No. 220/2023

ÍNDICE

Introducción	8
Apartado 1	
Crisis alimentarias estructurales y crónicas en el norte de África	16
Apartado 2	
Impactos económicos y sociales de las crisis en el sector alimentario	42
Apartado 3	
La Unión Europea y España ante las crisis alimentarias en el norte de África	50
Apartado 4	
Conclusiones y recomendaciones	56
Bibliografía	62
Biografía	66



RESUMEN ABSTRACT

La guerra en Ucrania, sumándose a las crisis anteriores ha tenido un fuerte impacto sobre los países de norte de África dependientes de los mercados mundiales para alimentar a su población. La inflación y la perturbación de las cadenas de suministro han agudizado las crisis económicas y sociales y los riesgos de inseguridad alimentaria de las franjas más vulnerables de la población de esta región incrementando las fracturas territoriales y las desigualdades. El documento trata de arrojar luz sobre las causas estructurales de las crisis de los sistemas alimentarios y agrícolas de algunos países del norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto). Se analiza también sus consecuencias y la contestación de unos modelos de desarrollo agrícola cuya sostenibilidad es cada vez más cuestionada por las injusticias sociales que conllevan y el uso desmedido de recursos naturales cada vez más exiguos por el cambio climático.

The war in Ukraine, in addition to the previous crises, has had a strong impact on North African countries dependent on world markets to feed their populations. Inflation and the disruption of supply chains have exacerbated the economic and social crises and the risks of food insecurity for the most vulnerable segments of the population in this region, increasing territorial fractures and inequalities. The paper seeks to shed light on the structural causes of the crises in the food and agricultural systems of certain North African countries (Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt) It also analyses the consequences and challenges of agricultural development models whose sustainability is increasingly questioned due to the social injustices they entail and the excessive use of increasingly scarce natural resources as a result of climate change.

INTRODUCCIÓN

La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas alimentarios de los países del norte de África, y su dependencia y exposición a los choques externos. Las crisis sucesivas que han golpeado la región (crisis alimentaria en 2007, crisis financiera de 2008, inestabilidad política post 2011, pandemia de la COVID 19) han exacerbado las desigualdades sociales y la inseguridad alimentaria y cuestionan la adecuación y sostenibilidad de los modelos de políticas agrícolas y de los sistemas alimentarios elegidos para satisfacer las necesidades alimenticias de una población en constante crecimiento.

La guerra en Ucrania como indican Abis y Mordacq, ha incrementado las tensiones sobre la oferta en un mercado globalizado de los productos agrícolas y alimentarios. Las alteraciones de las cadenas globales de suministro durante la pandemia de la COVID 19 ya habían producido tensiones sobre los mercados, agudizadas por la estrategia de China de internacionalizar su seguridad alimentaria y por el impacto del Cambio Climático sobre la capacidad productiva de los países, resumiéndose en 4 C (Conflicto, COVID 19, China y Cambio climático) que alimentan la espiral inflacionista (Abis y Mordacq, 2022).

Se trata de dinámicas que se afianzarán en los próximos años y que plantean grandes desafíos para los países más dependientes de las importaciones de alimentos como es el caso de los países del norte de África. Esta situación de vulnerabilidad y dependencia de los mercados globales ha reactivado en los países de la región el debate sobre la soberanía alimentaria y la necesidad de revisar en profundidad los modelos de desarrollo adoptados y en particular las estrategias alimentarias y agrícolas.

Aunque los modelos de desarrollo agrícola que fueron adoptados tras las independencias respondían a visiones políticas e ideológicas diversas, todos los países de la región partieron de sistemas agrícolas duales heredados del periodo colonial. Por un lado, una agricultura intensiva en capital y recursos naturales (agua y tierra) orientada hacia la exportación, y por otro lado, una agricultura de

subsistencia precaria y rudimentaria desatendida por los poderes públicos, aunque era esta, sin embargo, la que sustentaba las necesidades de alimentación de una gran parte de la población rural.

Las políticas agrícolas adoptadas en los años posteriores a las independencias no consiguieron acabar con esta dualidad. La creciente liberalización de los intercambios comerciales acentuó este desequilibrio al favorecer el recurso a las importaciones cerealísticas como vía con la que suplir los déficits de la producción nacional con los que atender las necesidades locales. Las medidas de liberalización adoptadas por los Estados del norte de África a partir de los años 80 bajo los auspicios del FMI (conocidas como políticas de apertura o *infithah*) aceleraron el proceso de consolidación de unas agriculturas orientadas hacia la exportación de los productos agrícolas demandados por los mercados europeos con las que captar divisas con las que reembolsar la deuda acumulada. Estas estrategias fueron acompañadas de una privatización de las tierras controladas por los Estados.

El paradigma de seguridad alimentaria dominante abundó en la misma dirección al basarse en la necesidad de incrementar las posibilidades de producción, pero también en la liberalización de los intercambios agrícolas confiando en que las virtudes del mercado permitieran a cada país satisfacer de forma óptima sus propias necesidades. Este enfoque ha afianzado dinámicas de competencia desigual, extracción y destrucción medioambiental (Amouzai y Kay, 2023).

Además, la visión neoliberal de la seguridad alimentaria no ha tenido en cuenta ni las asimetrías de partida que caracterizan a los diferentes sistemas agrícolas de los países de la región desde las independencias ni las disfunciones y desigualdades derivadas de la liberalización del comercio y de los numerosos mecanismos de proteccionismo encubiertos (Nubukpo, 2021). A todo ello se suma la concentración de riquezas y poder en unos pocos grupos agroindustriales que alteran también las lógicas

liberales del mercado global de los alimentos con dinámicas de especulación financiera, que, a escala global, contribuyen a incrementar los precios de las materias primas agrícolas. Además, con la globalización, las cadenas de suministro se han complejizado lo que las dota de mayor vulnerabilidad y exposición a las crisis mundiales (financiera, sanitaria o provocada por la confrontación bélica entre Rusia y Ucrania).

El nivel de interdependencia existente en un sector estratégico tan clave como la agricultura pone a prueba la capacidad de los gobiernos para responder a esta crisis. Para hacer frente a un incremento de la demanda por el crecimiento demográfico, la capacidad de aumentar la producción interna es limitada por la escasez de recursos (tierra y agua), por la dependencia de fertilizantes y semillas, con precios muy sensibles a las fluctuaciones de los mercados internacionales y por los efectos del cambio climático lo que supone un reto cada vez más acuciante para mantener la producción agrícola en un contexto de sequías crónicas combinados con fenómenos meteorológicos intensos cada vez más frecuentes.

Los modelos de desarrollo agrícola adoptados han tenido además consecuencias sociales de gran calado acentuando las disparidades y fracturas territoriales en los países divididos en territorios útiles (zonas costeras urbanizadas) y zonas marginadas, sistemas extractivos y destructivos del medio ambiente.

La cuestión de la in-seguridad alimentaria es central para la seguridad humana de la población del norte de África y, en cierto modo, es un indicador clave de las fragilidades estructurales de los modelos socioeconómicos y políticos de los Estados, visible en el ciclo de movilizaciones y protestas que desde 2011 han tenido lugar en la región como reflejo de la crisis de legitimidad de los regímenes. Una encuesta del *Arab Barometer* publicada en 2022 reflejaba el alcance de la percepción de inseguridad alimentaria entre la población de estos países (67% de los encuestados en Libia, 62% en Marruecos y 68% en Egipto)¹.

La consecuencias de esta situación de alta dependencia son una elevada exposición a los choques externos que, en el caso del norte de África, es un proceso acumulativo que limita también la capacidad de respuesta de los Estados inmersos en una continua gestión de crisis.

Las políticas europeas y las relaciones comerciales desarrolladas en el marco de los partenariados establecidos con los países de la región a partir de los años 90 han formado parte del problema más que de la solución. Su asimetría, sobre todo en relación con los productos agrícolas, ha ahondado los problemas estructurales de los sistemas alimentarios del norte de África acentuando las lógicas de sistemas de exportación en detrimento de una agricultura más orientada hacia la satisfacción de las necesidades alimentarias locales (Jouili y Elloumi, 2022).

En la primera parte del documento se hace un repaso a los sectores alimentarios de los países de la región (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Libia) y a los choques externos que afrontan. Se describen asimismo los sistemas agrícolas de la región y los retos que plantea el cambio climático. La segunda parte del documento se centra en analizar los impactos socioeconómicos de las crisis con el incremento de las fracturas sociales y desigualdades geográficas y sectoriales, así como el impacto que la in-seguridad alimentaria tiene en los sectores más vulnerables de las poblaciones. Finalmente, en la tercera parte se aborda la respuesta de la UE y España en relación con esta problemática.

1. Hay una brecha entre los indicadores de seguridad alimentaria y la percepción de la situación tal y como señala el informe del Barómetro Árabe de septiembre de 2022. De los 113 países incluidos en el Índice Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) de *The Economist*, Egipto, Jordania, Mauritania, Marruecos y Túnez obtienen “buenos” resultados en cuestiones de asequibilidad, disponibilidad, calidad y seguridad de los alimentos, y recursos naturales y capacidad de recuperación.







1

CRISIS ALIMENTARIAS ESTRUCTURALES Y CRÓNICAS EN EL NORTE DE ÁFRICA

1.1. EL IMPACTO DE LA GUERRA EN UCRANIA: PERTURBACIÓN DE LOS PRECIOS Y DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue alterando y reconfigurando los mercados agrícolas mundiales por el peso que estos dos países tienen en la producción mundial de cereales. En los últimos años, estos dos países han exportado el 34% del trigo comercializado en todo el mundo, el 17% del maíz y el 73% del aceite de girasol (FAO, 2022).

La ocupación y destrucción de parte de las tierras más fértiles de Ucrania ha reducido su capacidad productiva y exportadora², contribuyendo a la vez al fortalecimiento de Rusia como potencia agrícola. Tras los acuerdos del mar Negro³, ambos países han podido dar salida a su producción de cereales para abastecer el

mercado global. El impacto que los cortes de suministro tendrían en la seguridad alimentaria de los países más dependientes de las importaciones del mar Negro, ha impedido que las sanciones impuestas a Rusia hayan afectado a los productos agrícolas (tampoco a los fosfatos). En 2022, por ejemplo, la dependencia egipcia de las importaciones procedentes de Rusia paso del 50% al 57% (Agence Ecofin, 2023).

La guerra en Ucrania, sumándose a las crisis anteriores, ha tenido repercusiones graves sobre la situación económica y social de los países del norte de África. La primera consecuencia ha sido el fuerte incremento del precio de las materias primas agrícolas y de insumos como los fertilizantes, claves para la productividad agrícola, cuyo coste ya se había elevado durante la pandemia. En comparación con su nivel medio en 2019,

2. 4 millones de toneladas de cereales y oleaginosas han sido destruidas o robadas, y 9,4 millones de toneladas de productos agrícolas han sido dañadas o destruidas. Ucrania sufrió pérdidas por valor de 11.200 millones de dólares en las cosechas de 2022 y espera absorber 3.000 millones de pérdidas en las cosechas de invierno de 2022-2023 (Welsh, 2023).
3. La Iniciativa de Cereales del Mar Negro es un acuerdo auspiciado por la ONU para abastecer a los mercados de alimentos y fertilizantes se prorrogó en marzo de 2023. <https://news.un.org/fr/story/2023/03/1133402#:~:text=Depuis%20la%20signature%20de%20l,sommets%20vertigineux%20en%20mars%202022.>

los precios del trigo aumentaron un 7% en 2020 y un 36% entre 2020 y 2021(Brun, 2023). Con la guerra en Ucrania los precios se dispararon. En sólo dos semanas, entre el 21 de febrero y el 7 de marzo de 2022, los precios mundiales del trigo aumentaron un 57%, manteniéndose entre marzo y mayo de 2022 en los niveles más altos desde 2008. La crisis en Ucrania también provocó una subida de los precios del petróleo y del gas natural⁴ lo que ha agravado aún más la subida de los precios de los alimentos.

Si bien los precios se han estabilizado después del pico alcanzado en el primer trimestre de 2022⁵, estos se han mantenido a un nivel más elevado que durante el periodo anterior al inicio de la crisis.

Junto al impacto provocado por el aumento de los precios, los estados magrebíes más dependientes de las importaciones cerealísticas han tenido que enfrentarse también al riesgo de desabastecimiento. Además, el peso de Rusia y Ucrania en la producción y ventas de cereales, ha tenido un impacto global sobre las disponibilidad y reservas y los precios ya afectados por las crisis anteriores (Brun, 2023).

La menor disponibilidad de grano ucraniano y ruso, la interrupción de las cadenas de suministro y las sanciones y restricciones impuestas a la economía rusa tuvieron un efecto desestabilizador inmediato en las economías norteafricanas.

En el norte de África, los cereales representan entre el 30 y el 50% de la ingesta calórica diaria. Altamente dependientes del abastecimiento exterior, la subida de los precios ha provocado consecuencias económicas en cadena debilitando aún más las frágiles economías de los países magrebíes. El 75% de las importaciones de trigo de Libia proceden de Rusia y Ucrania, casi el 50% en el caso de Túnez y el 80% en el caso de Egipto⁶. En 2022, la dependencia egipcia de las importaciones de Rusia aumentó: del 50% el año anterior al 57% en 2022 aunque los volúmenes disminuyeron de cereales importadas del 6,7% (Agence Ecofin, 2023).

La perturbación en las cadenas de suministro ha alimentado una espiral inflacionista que ha repercutido en las ya frágiles economías de la región: la factura alimentaria ha incrementado los déficits de las balanzas comerciales de los países dependen-

4. El gas natural es el principal insumo para producir abono nitrogenado, el fertilizante más utilizado para los principales cultivos básicos, incluido el trigo.

5. El 22 de julio de 2022, las Naciones Unidas y Turquía negociaron un acuerdo para la apertura de un corredor humanitario marítimo seguro en el mar Negro (la Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por el Mar Negro) fue prorrogada en marzo de 2023. <https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/ukrainian-grain-exports-explained/>

6. <https://www.iemed.org/publication/la-guerra-en-ucrania-agrava-la-inseguridad-alimentaria/?lang-es>

1. CRISIS ALIMENTARIAS ESTRUCTURALES Y CRÓNICAS EN EL NORTE DE ÁFRICA

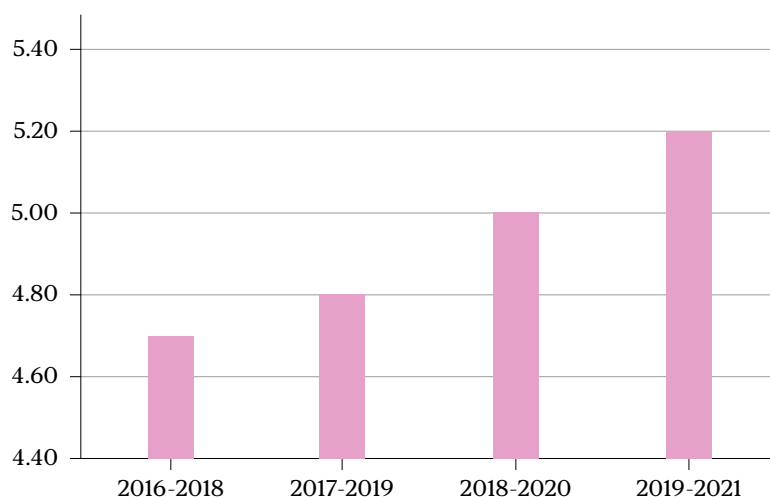


Figura 1: Número de personas subalimentadas (millones) en Egipto.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de <https://www.fao.org/faostat/en/#data/FS>

tes de las importaciones⁷ con un impacto negativo en los equilibrios presupuestarios, agravando el endeudamiento lo que, unido a las devaluaciones monetarias (libra egipcia 17%, dirham 4,5% dinar tunecino del 3%) ha provocado fuertes desequilibrios financieros en los diferentes países. (Ben Hassen y El Bilali, 2022).

La multiplicación de crisis ha revertido asimismo en los avances logrados en materia de seguridad alimentaria durante las décadas anterio-

res⁸. Los efectos del Cambio Climático (CC) con sequías e inundaciones que afectan a la producción agrícola y al acceso al agua son factores agravantes y duraderos de inseguridad alimentaria para las poblaciones del norte de África (Rédha Younes Bouacida, 2023).

El margen de actuación de los estados de la región para reducir su dependencia de las importaciones alimentarias es limitado por la escasez de recursos necesarios para incrementar el volumen de producción de

7. Argelia, con un déficit en su balanza comercial agroalimentaria de más de 7.000 millones de dólares en 2020 (Brun 2023).

8. El concepto de seguridad alimentaria abarca diferentes dimensiones como la disponibilidad, accesibilidad, aspectos nutricionales y estabilidad; no dice mucho sobre las estrategias que los países deben seguir para garantizarla a sus ciudadanos. El paradigma dominante ha sido que la liberalización del comercio y las virtudes del mercado podían garantizar esta seguridad alimentaria. Esta visión es cada vez más cuestionada y el concepto de seguridad alimentaria, así como las técnicas para medirla no contemplan dimensiones claves para entender la cronificación de un fenómeno muy vinculado al reparto desigual de las riquezas en los países.

cereales. La disponibilidad del agua y su distribución es un aspecto clave. Egipto dispone de algo más de la mitad de los recursos hídricos explotados en la región (Mahjoub, Chaibi, y Shamseddin, 2021). Mientras que Egipto y Marruecos tienen un potencial hídrico inferior a 1000 m³ per cápita y año y se enfrentan a una escasez crónica de agua, Argelia, Túnez y Libia están al borde de la escasez absoluta con una disponibilidad de agua dulce inferior a 500 m³ al año.

Sin embargo, no sólo son los factores naturales los que condicionan la viabilidad de modelos agrícolas capaces de responder a las necesidades alimentarias de la población del norte de África. Las estrategias agrícolas heredadas del periodo colonial y reconducidas en las etapas posteriores han afianzado modelos de desarrollo

agrícolas que lejos de garantizar esta autosuficiencia alimentaria han generado más dependencias del exterior.

1.2. CRISIS ESTRUCTURALES EN LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS DE LOS PAÍSES DEL NORTE DE ÁFRICA: LOS CASOS DE MARRUECOS, ARGELIA, TÚNEZ, EGIPTO Y LIBIA

Aunque el sector agrícola sigue siendo un sector del cual depende todavía una parte importante de la población (Marruecos 41%; Argelia 40%; Túnez 36%), su contribución al PIB es cada vez más reducida (11% en Argelia, 13% en Túnez y 18,3% en Marruecos)⁹.

Los 5 países del norte de África analizados en este informe dependen, en mayor o menor medida, de

	Importaciones (miles de toneladas)	Producción (miles de toneladas)	Suministro interno (miles de toneladas)	% Dependencia (Importación suministro interno)
Argelia	7066,00	3107,00	11616,00	60,82
Egipto	9093,00	9117,00	17672,00	51,45
Libia	1219,00	130,00	1410,00	86,45
Marruecos	5591,00	2562,00	10589,00	52,80
Túnez	2001,00	1042,00	2911,00	68,73

Tabla 1: Importaciones y producción de trigo en 2020 (miles de toneladas)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: <https://www.fao.org/faostat/es/#data/FBS>

las importaciones de alimentos y de cereales. En 2020 Egipto importó el 51,45% de los cereales destinados al abastecimiento interno, Argelia el 60,82%, Marruecos el 52,8%, Libia el 86,45% y Túnez el 68,73%.

El rápido crecimiento de la demanda interna (presión demográfica, modificación hábitos alimentarios...) ha conducido a un incremento de las importaciones. A los factores naturales que limitan las posibilidades de incrementar la producción (escasez de agua, acceso a tierras cultivables) hay que sumar los déficits estructurales de sistemas agrícolas orientados hacia la exportación que han erosionado las capacidades locales de producción de alimentos. La dependencia de las importaciones los hace más vulnerables a las fluctuaciones de precios en los mercados internacionales de alimentos causadas por políticas comerciales restrictivas, especulación financiera, fluctuación de los precios de la energía o fenómenos climáticos adversos en los principales países exportadores.

En cada apartado, tras una breve mención al impacto directo de las crisis sobre la seguridad alimentaria, el análisis se centra en los factores

estructurales y las políticas agrícolas que explican su vulnerabilidad y alta dependencia del exterior.

Túnez, un país muy golpeado por las crisis

La acumulación de crisis internas y externas ha asestado un duro golpe a la economía tunecina. En 2020 el PIB del país cayó un 8,6% respecto al año anterior, el déficit presupuestario creció hasta suponer el 10,2% del PIB, mientras que la deuda pública se situó en el 89,74% del PIB. En 2022, el déficit comercial aumentó hasta el 15% del PIB con la energía y los alimentos representando el 69% del déficit⁹. La guerra en Ucrania ha agravado su fuerte dependencia de las importaciones de cereales (las importaciones de trigo de Ucrania representaban el 47,7% del total de sus importaciones)¹⁰. Durante el periodo de 2021-2022 Túnez importó 3,7 millones de toneladas de trigo para compensar una limitada producción nacional (810.000 hectáreas cultivadas en 2021 y 1,6 millones de toneladas cubriendo menos de la mitad de las necesidades domésticas (Emam, 2022).

9. <https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/10/17/poverty-has-fallen-in-the-maghreb-but-inequality-persists>).

10. <https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2023/03/30/tunisia-reforming-energy-subsidies-to-enhance-economic-resilience>

11. <https://www.ecomnewsmed.com/2022/03/16/tunisie-queles-sont-les-consequences-de-la-guerre-ukraine-sur-leconomie-tunisienne-et-notamment-sur-ses-importations-en-cereales/>

Esta alta dependencia de las importaciones y el elevado nivel de los precios han repercutido directamente sobre la asequibilidad de los bienes de primera necesidad para la población, agudizando los problemas de inseguridad alimentaria que ya existían. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 25,1% de los tunecinos se encontraban en un estado de inseguridad alimentaria de moderada a grave durante el periodo 2018-20, en comparación con el 18,2% del periodo 2014-16¹². Según el informe 2015-2020 del Instituto Nacional de Estadística (INS), los precios de las frutas y hortalizas aumentaron durante este periodo en un 135%, convirtiéndose así en inaccesibles para gran parte de la población. La alimentación representa de media casi el 30% del gasto familiar y es la partida más importante en el presupuesto de los hogares¹³ por lo que la repercusión de la inflación sobre los precios de los alimentos es considerable. En septiembre de 2022, los precios de los alimentos aumentaron un 13% respecto al año anterior (Younes Bouacida, 2023). En

febrero de 2023 la inflación era del 10,4% y los precios de los alimentos aumentaron en un 15,6%,

Para compensar la subida de los precios, el gobierno tunecino ha mantenido un sistema de subvenciones de precios a los productos de primera necesidad que, con el precio de los alimentos al alza, es cada vez más costoso e insostenible para el equilibrio de las finanzas públicas¹⁴. En 2022 el déficit presupuestario había crecido hasta el 12% del PIB¹⁵ mientras que la deuda pública externa, que garantiza el funcionamiento de la administración central y alimenta el presupuesto del Estado, alcanzó los 35.200 millones de euros absorbiendo el 79,36% del PIB¹⁶. Las negociaciones con el FMI no han desembocado en el momento de redactar este informe en un acuerdo, acuerdo que se ha visto complicado tras el anuncio en abril de 2023 del presidente de la república Kais Saïed de suspender las conversaciones pese a la urgente necesidad que la economía tunecina tiene de esa financiación (Brésillon, 2023). Uno de los escollos en las negociaciones con el FMI ha sido precisamente la reforma del sistema de

12. <https://www.fao.org/faostat/en/>

13. <https://nawaat.org/2022/09/14/tunisia-running-dry/>

14. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda los gastos inducidos por el mecanismo de compensación de los precios de los alimentos y combustible aumentaron un 51% en el primer trimestre de 2022 en comparación con el mismo periodo de 2021.

15. <https://www.leconomistemaghrebin.com/2023/02/10/tunisie-deficit-budgetaire-creuse-12/>

16. <https://fr.countryeconomy.com/gouvernement/dette/tunisie>

subvenciones de los precios de los alimentos y de la energía (Menzli Ayab, 2022). Aunque el proceso de reforma empezó en 2019 con el establecimiento de un sistema de compensación directa selectiva “Amen social”, la resistencia de actores sociales de peso como el sindicato UGTT y el riesgo social que conlleva su implementación lo han paralizado. Dos visiones se oponen en relación a esta reforma. Frente a una concepción de la protección social como mero mecanismo de compensación para minimizar los riesgos sociales, los actores de la sociedad civil defienden un sistema de protección social basado en un enfoque de derechos y justicia social (Chandou, Ben Rouine, Al-Ajlouni, Falsy y Azouaoui, 2022).

El gobierno teme que el desmantelamiento de este mecanismo de protección social provoque estrallidos sociales. Intentos anteriores desembocaron en protestas populares masivas a finales de los 7 y en diciembre de 1983 y enero de 1984. Estos precedentes explican la decisión del presidente de suspender los acuerdos con un discurso teñido de soberanismo, aunque su margen de maniobra para gestionar la crisis es muy reducido.

La acumulación de crisis ha impedido al gobierno tunecino revisar en profundidad su modelo de desarrollo y, en particular, su estrategia

para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Ha prevalecido una estrategia comercial basada en la promoción de una agricultura intensiva en capital y recursos naturales destinada a la exportación supliendo los déficits de alimentos necesarios para nutrir a la población con importaciones. Este modelo ha marginado la agricultura tradicional y de subsistencia a través de políticas agrícolas que han reforzado las desigualdades y una distribución no equitativa del acceso a la tierra. En Túnez, el 54% de los agricultores disponen de menos de 5 hectáreas, lo que representa el 11% del total de las tierras cultivadas, con una media de 2 hectáreas por agricultor, mientras que el 3% de los agricultores tienen tierras de más de 50 hectáreas lo que representa el 34% de las tierras cultivadas (Ayeb y Bush, 2019). También se observa una disminución constante de las superficies destinadas a la producción de cereales del 1,05% anual entre 1980 y 2018 (Jouili y Elloumi, 2022).

La cuestión de la propiedad de la tierra está en el centro del problema de la reforma de su sistema agrícola. En el contexto de los años 80 y con la aplicación de políticas liberales, el Estado utilizó las tierras de propiedad estatal para atraer inversiones extranjeras. En los años previos a la revolución de 2011, algunas de estas

tierras fueron concedidas a personas cercanas al régimen de Ben Ali (Ayeby Bush, 2019). En el periodo posterior, a pesar de las movilizaciones de la sociedad civil, no se ha cuestionado este acaparamiento de tierras ni se han puesto en marcha reformas profundas del sistema agrícola para reducir la dependencia de las importaciones. A principios de 2017 el gobierno tunecino anunció un nuevo plan quinquenal para la agricultura con el anuncio de apoyar a los pequeños agricultores, pero desde entonces no se han producido cambios significativos en relación con el acceso a la tierra, ni la marginación de las zonas rurales.

La productividad de la agricultura está condicionada también por su dependencia externa de insumos como los fertilizantes cuyos precios se han disparado en el contexto de la guerra en Ucrania. Aunque Túnez cuenta con fábricas de fosfatos, algunas de ellas han visto alterado su ritmo de producción por huelgas y protestas en el sector como las que afectaron a la fábrica de fertilizantes de Mdhilla chemical, en Gafsa¹⁷.

La escasez de agua también limita las posibilidades de aumentar la producción agrícola. La agricultura consume el 75 % de los recur-

sos hídricos disponibles en el país y las reservas de agua, tanto de superficie como subterráneas, son cada vez más limitadas. La disponibilidad de recursos hídricos renovables es en la actualidad de 420 m³ anuales por habitante, por debajo del umbral de escasez absoluta de agua de 1000m³ (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (AQUASTAT, 2018). Las prolongadas sequías han agravado la escasez de agua. Entre septiembre de 2022 y mediados de marzo de 2023 las reservas de los embalses estaban en un 30 % de su capacidad. La presa de Sidi Salem, en el norte, principal abastecedora de la capital, estaba al 16% de su capacidad, (Bajec Alessandra, 2023). En los próximos años, se prevé que los recursos hídricos sigan disminuyendo¹⁸. El impacto directo del aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones acentuarán el estrés hídrico en muchas regiones tunecinas en los próximos años (USAID, 2022).

La disminución de la disponibilidad de los recursos hídricos también está relacionada con la mala gestión de este precioso recurso por parte del Estado: el escaso mantenimiento de las grandes presas de Túnez, con instalaciones vetustas, afecta a la canti-

17. <https://allafrica.com/stories/202105210747.html>

18. <https://nawaat.org/2022/09/14/tunisia-running-dry/>

dad y calidad del agua utilizable. La aplicación deficiente de la normativa, la falta de planificación y la excavación ilegal de pozos han provocado una sobreexplotación de la capa freática y un empeoramiento de la calidad del agua disponible. Además, las políticas agrícolas que han orientado la agricultura tunecina hacia cultivos de alto valor añadido para la exportación, en detrimento de los cultivos de secano, requieren mucha agua. La inestabilidad política ha impedido la adopción de reformas de mayor envergadura encaminadas a resolver los problemas estructurales y revertir el rumbo de las políticas agrarias que concentraban los recursos agrícolas en manos de unos pocos grupos agroindustriales que crecieron a la sombra del clientelismo del régimen de Ben Ali. Además, las medidas adoptadas son reactivas y susceptibles de incrementar el descontento social como el incremento del precio del agua y los cortes de agua que se produce en un momento en que la población se enfrenta a una crisis económica cada vez más grave.

Argelia: un sistema agrícola marginado y una seguridad alimentaria dependiente de la renta de los hidrocarburos

Argelia comparte la misma dependencia alimentaria que su vecino tunecino. Primer importador africano de productos alimentarios, con cerca del 75% de sus necesidades básicas cubiertas a través de importaciones¹⁹, Argelia ha importado una media de más de 12 millones de toneladas de cereales al año durante los últimos cinco años, mientras que la producción anual rondaba los 4,92 millones de toneladas, de las cuales 3,3 millones eran de trigo (Té-Léssia Assoko, 2022). La producción local solo permite cubrir el 25% del consumo de cereales en Argelia²⁰.

En consecuencia, la factura alimentaria no ha dejado de crecer. De apenas 684 millones de dólares en 1974, las importaciones de alimentos alcanzaron los 9.750 millones en 2011 (un aumento de 14 veces) antes de estabilizarse en torno a los 8.000 millones en los últimos años²¹. El peso de las importaciones en la satisfacción de las necesidades alimentarias del país agrava la exposición de la

19. <https://www.algerie360.com/lalgerie-premier-importateur-africain-de-denrees-alimentaires-75-de-ses-besoins-assures-par-les-importations/>

20. https://fr.siyada.org/contact_frsiyada-org/nourriture-eau-et-terre/limpact-de-la-guerre-russo-ukrainienne-sur-lalgerie-vers-un-systeme-alimentaire-plus-durables-et-resilient/

21. <https://algeria.fes.de/e/le-modele-alimentaire-en-algerie-etat-des-lieux-et-perspectives-devolutions>

economía argelina a las perturbaciones del mercado mundial de materias primas. Con la subida de los precios de las materias primas en los mercados internacionales tras la pandemia de la COVID 19, la factura alimentaria superó los 10.000 millones de dólares en 2021 (Metboul, 2023) con repercusión en los precios de los productos de primera necesidad para la población. Los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y gas han permitido a Argel compensar en parte las fluctuaciones de los precios internacionales (Brun, 2023).

En víspera del Ramadán de 2023, la inflación en Argelia se situaba en el 9,60% aunque el precio de los alimentos aumentó en un 13,72%²² respecto al año anterior. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONS), la tasa de inflación anual para el año 2022 ha sido del 9,3%²³.

Para amortiguar el elevado coste de los productos de primera necesidad Argelia tiene un margen mayor que sus vecinos ya que el sistema de subsidios destinado a mantener la calma social es financiado con los ingresos de los hidrocarburos. La ley de finan-

zas de 2023 prevé transferencias sociales por valor de 640.000 millones de dinares²⁴ destinadas a subvencionar el combustible, la electricidad, el agua, ayudas a la vivienda y el empleo.

Aun así, la preocupación por mantener el abastecimiento ha impulsado la diversificación de proveedores. La mayor parte de las importaciones argelinas de trigo proceden de la Unión Europea (UE), siendo tradicionalmente Francia, la fuente principal de suministro. Las cíclicas tensiones políticas con Francia han impulsado una estrategia de diversificación y la firma de contratos con otros proveedores como Canadá, Alemania, Estados Unidos, España y México. Por primera vez desde 2016, la Federación Rusa envió trigo a Argelia en junio de 2021 pero su dependencia de las importaciones cerealísticas del mar Negro es menor que en los casos de Egipto o Túnez²⁵.

Aun así, la guerra ruso-ucraniana ha tenido un impacto en Argelia. La espiral inflacionista incrementa su factura alimentaria global y eleva los riesgos de cortes en el abastecimiento. La inseguridad alimentaria

22. Agence Nationale de Statistiques: <https://www.ons.dz/IMG/pdf/I.IPC022023.pdf>

23. Los bienes de consumo, incluidos los productos agrícolas, registraron una tasa de inflación de dos dígitos del 15,04% para los productos alimenticios en febrero y marzo de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022, incluidos los productos agrícolas, que registraron un aumento del 25,53%. <https://www.ons.dz>

24. <https://www.lnr-dz.com/2023/01/06/le-budget-des-subsidations-seleve-a-640-mds-da-en-2023/>

25. Argelia ha comprado 600.000 toneladas de trigo a Francia en 2022; 500.000 toneladas a México. https://fr.siyada.org/contact_frsiyada-org/nourriture-eau-et-terre/limpact-de-la-guerre-russo-ukrainienne-sur-lalgerie-vers-un-systeme-alimentaire-plus-durables-et-resilient/

ha mejorado en Argelia, pasando del 22,9% durante el periodo 2014-16 al 17,6% durante el periodo 2018-20 (Tanchum, 2021). Menos del 2,5% de la población argelina está subalimentada, frente al 8,5% a nivel mundial, al 3% de Túnez, el 4,2% de Marruecos o el 5,4% de Egipto (FAO, 2020). Sin embargo, otros datos matizan esta cifra. Antes de la COVID-19, se estimaba que 24 millones de argelinos gastaban más del 60% de sus ingresos sólo para satisfacer sus necesidades alimentarias²⁶.

La presión demográfica es otro factor que también puede influir en los avances realizados en materia de seguridad alimentaria: de 11,27 millones de habitantes en 1960 la población argelina era de 45,6 millones de habitantes en enero de 2023 (Mebtoul, 2023).

El sector agrícola argelino representa el 12% del PIB y ocupa a algo más del 20% de la población activa y sigue siendo fundamental para el desarrollo de las zonas rurales. Se calcula que 11,5 millones de personas siguen viviendo en zonas rurales²⁷. La superficie agrícola útil (SAU) total de Argelia se estima en más de 8,5 millones de hectáreas, de las cuales el 15% son de regadío.

Como en el caso tunecino, la capacidad de Argelia de reducir su dependencia externa está limitada por condicionantes naturales y políticos.

Las sucesivas reformas emprendidas por Argelia en el sector agrícola no han conseguido revertir su dependencia de las importaciones. Desde la independencia, el Estado ha ocupado un lugar central en la gestión de la economía del país y en la del sector agrícola en particular. Argelia optó por la autogestión de los antiguos dominios agrícolas coloniales a través de un proceso de colectivización de tierras (Bessaoud, 2006). A partir de los años 70, la consolidación de la economía rentista permitió financiar la factura alimentaria sin que el sistema agrícola fuera reformado. Aunque se buscó un incremento de la productividad, la dependencia de las importaciones de bienes agrícolas se mantuvo. Las reformas de 1971 extendieron el control del Estado al 40% de la superficie útil de Argelia (Omari, Moisseron y Alpha, 2012). Las reformas acometidas en el marco de la liberalización de los años 80 no resolvieron la compleja cuestión de la propiedad de la tierra tras la experiencia colectivista de los años 70. Los planes adoptados para la modernización del

26. <https://www.asjp.cerist.dz/en/downloadArticle/109/3/2/92285>

27. https://fr.siyada.org/contact_fr/siyada-org/nourriture-eau-et-terre/li...sur-lalgerie-vers-un-systeme-alimentaire-plus-durables-et-resilient/

sector agrícola (PNDA 2000, PNDAR 2002, 2008) y los más recientes no han conseguido incrementar significativamente la base productiva del país y revertir la dependencia externa estructural de los productos alimentarios. (Adair *et al.* 2022; Omari, Moisseron y Alpha, 2012).

A finales de 2020, Argelia publicó una estrategia de hoja de ruta 2020-24 para varios productos agrícolas clave con el fin de reducir su factura de importación de alimentos²⁸. En el sector del trigo, se espera que la modernización propuesta del regadío multiplique por dos o por tres el rendimiento actual, lo que podría aumentar la producción en 7 millones de toneladas métricas de trigo al año en 2024. Argelia se ha fijado el objetivo de construir 31 silos metálicos con los que incrementaría en 670.000 toneladas métricas la capacidad de almacenamiento²⁹.

El acceso al agua y a la tierra suponen para la agricultura un desafío aún mayor que en el caso tunecino. La gestión de agua y mantenimiento de las infraestructuras también han sido deficientes debido a la falta de mantenimiento de las presas. La presa de Koudiat Asserdoun, en el río Isser, en Argel, una de las más importantes del país, sólo está al 3% de su capacidad

(Saïd, 2023). La respuesta de las autoridades ha consistido en apostar por la construcción de plantas desalinizadoras, tecnología que consume mucha energía). Argelia cuenta con 11 plantas desalinizadoras repartidas en nueve provincias.

El acceso a la tierra también se caracteriza por un reparto desigual con un proceso de acaparamiento de tierras por parte de grandes corporaciones que se han desarrollado gracias a la corrupción y a redes clientelistas (Hamadi, 2006) como el multimillonario Djilali Mehri con su gran finca de 35.000 palmeras datileras y 25.000 olivos destinados a la exportación. (Alilat, 2023)

Argelia también depende de la importación de fosfatos, aunque su consumo es menor que en otros países. En 2018, el consumo de fertilizantes para la agricultura argelina fue de 20,7 kilogramos (kg) por hectárea de tierra cultivable, en comparación con los 44,2 kg de Túnez y los 74,9 kg de Marruecos. Para reducir la dependencia externa, Sonatrach firmó en 2018 un acuerdo con CITIC Construction de China para edificar un complejo integrado de producción de fosfato por valor de 6000 millones de dólares. (Khettab Ould, 2018).

28. <https://agri-info.inva.dz/feuille-de-route-2020-2024/>

29. <https://www.aps.dz/economie/117332-reduire-la-facture-d-importation-des-produits-agricoles-de-2-5-milliards-de-dollars-a-l-horizon-2024>

Para evitar que la inflación de los precios al consumo de los alimentos agrave el malestar y las tensiones sociales, el Estado argelino ha aplazado la reforma de las subvenciones alimentarias y las ha extendido a los fertilizantes cuyo precio está subvencionado al 50% desde octubre de 2022. Asimismo desde diciembre de 2021 se ha vuelto a permitir la importación de vacas lecheras de alto rendimiento para aumentar la producción de leche fresca y se ha liberalizado la legislación sobre la importación de equipos agrícolas en beneficio de los inversores agrícolas.

También se ha tratado de impulsar grandes proyectos a través de inversiones agrícolas en las zonas saharianas para desarrollar cultivos estratégicos (cereales, forrajes para la alimentación animal, colza, remolacha azucarera y maíz). La Oficina de Desarrollo Agrícola Sahariana (ODAS) ha creado zonas de desarrollo en algunas wilayas del sur y se han otorgado concesiones de tierras a los inversores³⁰. La lógica de estas inversiones públicas es poco sostenible (modelo intensivo a base de insumos químicos y maquinaria a menudo importada) y sigue basándose en un modelo que favorece a los grandes terratenientes (cerca-

a los círculos de poder) en detrimento de la agricultura familiar.

Marruecos y la sostenibilidad de su modelo agrícola

Aunque la agricultura marroquí ha ocupado un lugar más prominente en el desarrollo del país con una apuesta por la modernización de un sector hortofrutícola destinado a las exportaciones generador de divisas (Desrues, 2004), Marruecos, al igual que los otros países del norte de África, depende en gran medida de las importaciones de cereales (60%) para alimentar a su población. Su dependencia directa de Rusia y Ucrania es menor que en otros países (10% del trigo procedente de Rusia 20%; 7% de Ucrania). Marruecos se ha visto afectado también por una fuerte inflación - 8,9% en enero de 2023- y por un aumento en los precios de los alimentos del 16,8%. Para atenuar sus consecuencias el gobierno ha mantenido el sistema de subvención de los precios de algunos alimentos de base como el pan a través de la Caja de Compensación lo que tiene un impacto negativo sobre su equilibrio presupuestario. Se prevé que el coste de subvencionar las importaciones

30. <https://www.aps.dz/economie/145562-odas-lancement-du-2eme-appel-a-projets-d-investissement-agricole-et-agro-industriel>

de trigo para 2023 ascienda a más de 8.500 millones de dinares, además de un total de 13000 millones de dinares para subvencionar la harina de trigo blando nacional, estimándose que los costes de compensación para este año deberían aumentar un 72% (Maroc.ma 2022).

Las crisis sucesivas que han impactado sobre la economía marroquí han tenido consecuencias sociales con un incremento de la pobreza. La encuesta de 2019 del Buró nacional de Desarrollo humano indicaba que el 45% de los marroquíes se consideran pobres, 38,6% en el ámbito urbano y 58,4% en el ámbito rural. 3,2 millones de personas en la pobreza tras la pandemia (Chahir, 2023). La inseguridad alimentaria afecta al 36% de la población marroquí con una gran brecha entre las zonas urbanas y rurales, con un empeoramiento en el Marruecos rural, que alcanza el 40%, frente al 30% en las ciudades (FAO, IFAD, UNICEF, WHO, ESCWA, 2023).

La cuestión de la seguridad alimentaria se ha convertido en una prioridad en la agenda de la monarquía. El 8 de octubre de 2021, el rey Mohammed VI elevó la cuestión a prioridad nacional pública al referirse a la cuestión en su discurso de apertura del nuevo parlamento del país.

En su discurso, el rey “insistió” en que Marruecos estableciera un “sistema nacional integrado” de reservas estratégicas para los suministros esenciales de alimentos, medicinas y energía, con el fin de hacer frente a futuros desabastecimientos mundiales y otras emergencias (Tanchum, 2021).

La agricultura es un sector muy importante para la economía marroquí. En 2019 representaba el 14% del PIB y ocupaba al 40% de la población activa. (MauSSION, 2023). Es un sector en crecimiento, cuyo valor ha pasado de 7.200 millones en 2008 a 11.700 millones de euros en 2018, lo que supone un crecimiento medio anual del 5,25%, superior a la tasa de crecimiento de la economía nacional (+3,4%). En 2022, las exportaciones de productos alimentarios ascendieron a 7.200 millones de euros con un incremento del 20% respecto al año anterior³¹.

Marruecos se enfrenta a problemas similares a los de sus vecinos, pero algunos de los retos comunes se ven agravados por el énfasis puesto en el desarrollo de exportaciones agrícolas de alto valor que consumen mucha agua y aumentan su dependencia de otros alimentos básicos para la población cuya producción tiende a reducirse por fenómenos

31. <https://www.agriculture.gov.ma/fr/actualites/realisations-des-exportations-des-produits-alimentaires-agricoles-et-maritimes-en-2022>

meteorológicos extremos. Por ejemplo, en 2022 la producción de trigo blando fue inferior a 2 millones de toneladas (Maussion, 2023). El margen de maniobra de Marruecos para reducir sus importaciones también es estrecho. En las últimas décadas se observa un descenso constante de la superficie cultivable dedicada al cultivo de cereales (Jouili y Elloumi, 2022). El incremento de la producción está también condicionado por la variación del clima con episodios de sequía severa como el de 2022³². Aunque el gobierno ha adoptado medidas puntuales para hacer frente al aumento de la factura de las importaciones y su repercusiones en los precios, como la decisión de octubre de 2021 de suspender los derechos de importación sobre el trigo blando y el trigo duro, no ha abordado los desequilibrios estructurales que afectan a su sector agrícola y a su incapacidad para satisfacer las necesidades alimentarias de la población.

Desde la independencia, el sector agrícola en Marruecos ha sido una prioridad. Las políticas agrícolas han apostado por una agricultura intensiva destinada a la exportación. La adopción del Plan Verde Marruecos

(PVM) en 2008, programa diseñado para promover el desarrollo socioeconómico estimulando la producción de exportaciones agrícolas de alto valor añadido, marcó un punto de inflexión y vino acompañada de un proceso de movilización de tierras agrícolas de dominio privado del Estado, que fueron cedidas a operadores privados nacionales o extranjeros, así como por la movilización de inversiones (20000 millones de \$). Los recursos movilizados han tenido un reparto desigual. El 80% ha sido canalizado hacia la agricultura de exportación. (Sraïri, 2022). El plan consiguió incrementar el valor de las exportaciones en un 117%, hasta los 3.500 millones de dólares y crear 342.000 nuevos puestos de trabajo (Ghanem, 2015).

A pesar de los problemas estructurales que conlleva, Marruecos ha ampliado su PMV con una nueva iniciativa -Generación Verde 2020-2030- destinada a mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la producción agrícola del país para la exportación y el consumo interno. Este nuevo plan responde a la misma lógica de agricultura intensiva. Su principal objetivo es duplicar la participación del sector agrícola en el PIB del reino, actualmente del 12,3%, pero también

32. El país tiene un déficit del 64% en comparación con una temporada normal, con una media nacional actualmente de 75 mm. <https://www.agenceecofin.com/agro/1702-95209-maroc-le-roi-mohammed-vi-mobilise-un-milliard-deuros-contre-la-secheresse-et-approuve-une-nouvelle-charte-d-investissements>

aligerar la balanza comercial exportando más y con mayor valor añadido (Berrada, 2020).

Esta estrategia también pretende mitigar los efectos negativos sobre la situación laboral del campesinado igualando el salario mínimo agrícola garantizado (SMAG) con el salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG), y busca soluciones al desempleo juvenil aumentando los incentivos para que los jóvenes cultiven un millón de hectáreas y creen 350.000 puestos de trabajos. (Mokenna, 2020). La dimensión ecológica está superficialmente integrada (con el objetivo de una baja sostenibilidad basada en la incorporación de tecnologías modernas para mejorar la eficiencia hídrica, la conservación de los suelos agrícolas y acompañar a los agricultores en la transición hacia las energías renovables).

Esta renovada apuesta por la agricultura intensiva en agua y la marginación de los cultivos de secano hace caso omiso de las advertencias sobre las externalidades medioambientales negativas. Además, otras medidas puntuales ponen de manifiesto la insostenibilidad del modelo de desarrollo agrícola, como la prohibición en la región de Guelmim-Oued Noun de cultivar sandías y melones, que requieren un uso intensivo de agua.

Aunque sea temporal, esta decisión, que sigue a tras otras medidas adoptadas en 2022 para limitar la superficie de las plantaciones de sandías en las zonas de Tata y Zagora (al este de Agadir), refleja la preocupación por la escasez de los recursos hídricos (Maussion, 2023).

El aumento de las temperaturas y las sequías prolongadas están provocando la degradación del suelo. Casi la mitad de las tierras marroquíes sufren erosión. En 2019 las tierras irrigadas representaban el 75% de la producción agrícola exportada. Sin embargo, sólo el 16% de las tierras agrícolas del reino se riegan con presas locales, lo que hace que la producción de cereales sea muy variable y vulnerable a los fenómenos meteorológicos³³.

La gestión del agua como en los casos de Túnez y Argelia presenta numerosos desafíos (Vecchio y Kuper, 2022) en un contexto marcado por la aleatoriedad y la disminución de las precipitaciones que no superan los 400 mm en más del 85% de las tierras agrícolas (Sraïri, 2022). Además, la expansión de los cultivos de exportación ha incrementado el sistema de regadío con extracción de agua de los acuíferos agotando la capa freática. Como en otros países, el mantenimiento de las presas existentes es un reto y el gobierno

33. <https://www.oecd.org/mena/eu-oecd-mediterranean-investment/EU-Issues-paper-agri-food-Morocco-EN.pdf>

marroquí trata de construir nuevas instalaciones. En febrero de 2021, Rabat anunció que iniciaría la construcción de cinco nuevas grandes presas con una capacidad total de almacenamiento de 525 millones de metros cúbicos, como parte de la fase 2020-27 de su plan nacional del agua, con el que pretende aumentar la capacidad total de las presas del país a 27.000 millones de metros cúbicos³⁴. También apuesta por la construcción de plantas desalinizadoras como en Agadir³⁵.

Cabe mencionar también que la guerra en Ucrania ha fortalecido la posición de Marruecos como exportador de fosfatos cuyo valor se ha multiplicado por dos desde el inicio de la guerra en Ucrania. La compañía de fosfatos OCP facturó durante el primer trimestre 2022 2.400 millones de euros, lo que supuso un 77% respecto al año anterior. Marruecos se ha beneficiado también de las restricciones chinas a sus exportaciones para satisfacer su mercado local, de las sanciones internacionales que afectan a la producción rusa y del impacto en la disponibilidad de materias primas para la producción de fertilizantes. Con el 70% de las reservas mundiales, la mayoría de las cuales se encuentran

en el Sahara Occidental, Marruecos ha reforzado su posición presentando una alternativa a la oferta rusa (Bounani, 2022). Esta posición está siendo utilizada también por Marruecos para apuntalar también su influencia diplomática en el África subsahariana. Como brazo ejecutor de esta nueva diplomacia del fosfato, la OCP, a través de sus 12 filiales en el continente africano, ha cedido el 20% de su producción a los países africanos (Brun, 2023) (2.000 toneladas a Gabón, 5.000 a Senegal). Se trata de un instrumento útil para obtener más apoyos en cuestiones estratégicas clave para Marruecos como el Sahara Occidental (Chahir, 2023).

El caso de Egipto

Egipto, al igual que sus vecinos magrebíes, depende en gran medida de las importaciones de alimentos, lo que le expone a los choques externos. El país más poblado de la región, con 104 millones de habitantes, importó 12,5 millones de toneladas de trigo en 2021 y 2022 con un coste de más de 10.000 millones de dólares (Emam, 2022).

Sus importaciones totales de trigo en 2022 ascendieron a los 4.200

34. <https://fr.le360.ma/politique/gestion-de-leau-20-nouveaux-barrages-en-attente-de-construction-au-maroc-263799/>

35. <https://lesec.ma/maroc/agadir-environ-16-million-dhabitants-beneficient-de-leau-dessalee.html>

millones de dólares³⁶. Al igual que la economía tunecina, la acumulación de crisis ha deteriorado la situación financiera de Egipto, que ha tenido que recurrir al apoyo de las instituciones financieras internacionales desde 2011. En noviembre de 2016, el FMI acordó ampliar un préstamo de 12.000 millones USD a Egipto para financiar el programa de reforma económica del gobierno y reducir la deuda pública del 127% del PIB en 2015-2016 al 80% del PIB en 2020. Entre otras medidas, las reformas solicitadas incluían la reducción del déficit presupuestario. En el punto de mira estaba el sistema de precios subvencionados. Las subvenciones a la energía se redujeron y los precios de los alimentos se triplicaron entre 2016 y 2019. Estas reformas tuvieron un impacto directo sobre el aumento de la pobreza que pasó del 27,8% en 2015 al 32,5% en 2017-2018³⁷.

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha agravado este ciclo inflacionista y su impacto en la pobreza y la inseguridad alimentaria. Las estadísticas oficiales publicadas en marzo de 2023 indican que la inflación ha alcanzado la cifra récord del 31,9%. El aumento más notable fue el productos alimenticios, cuyos pre-

cios subieron un 14,4% mensual y un 61,8% anual, causando graves tensiones en los hogares con ingresos más bajos (Mandour, 2023).

La respuesta inmediata a la crisis fue la adopción de medidas para mantener el abastecimiento diversificando, como en el caso de Egipto, las fuentes de suministro (ejemplo trato-trueque con la India) sin llegar a resolver del todo el problema (Agence Ecofin, s. f.).

A más largo plazo, las estrategias seguidas no rompen con un modelo que, lejos de reorientar la agricultura egipcia hacia una autonomía y sostenibilidad, acentúa la dependencia y una débil sostenibilidad.

En 2021, el sector agrícola representaba el 12,1% del PIB, y daba empleo al 20,3% de la población activa (Nour, 2023). Para satisfacer la creciente demanda de la población, la capacidad de Egipto para ampliar su base productiva también se ve limitada por el estrés hídrico y la escasez de tierras cultivables. Tras décadas de urbanización la disminución de las tierras cultivadas ha sido constante. La capacidad de producción de trigo era de 9 millones de toneladas en el 2021 lo que cubría al menos del 50% del consumo local (Emam, 2022).

36. <https://www.tridge.com/news/minister-of-irrigation-the-volume-of-our-food-imp>

37. <https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2021/02/Final-World-without-poverty-Egypt-31-january-2021.pdf>

Además, como en otros países, el agua es un bien subvencionado (subsídios) y su gestión y consumo ocasiona muchos despilfarro. El crecimiento exponencial de la población también supone un desafío para las necesidades de consumo de un bien cada vez más escaso (Deen, 2022). La escasez de agua en Egipto se ha agudizado debido al rápido crecimiento de la población. A principios de la década de 1990, la disponibilidad de agua cayó por debajo del umbral internacional de escasez de agua de 1.000 metros cúbicos per cápita al año. En 2007, Egipto se acercaba al umbral de pobreza hídrica, con una disponibilidad anual per cápita inferior a 700 metros cúbicos (Perez *et al.*, 2021).

La falta de eficacia y coordinación de las políticas públicas de gestión y desarrollo de los recursos hídricos es otro factor que agrava el problema del agua. La agricultura y el regadío representan el 80% del uso del agua en Egipto según datos del Ministerio de Recursos Hídricos e Irrigación³⁸. En diciembre de 2016, el Ministerio de Recursos Hídricos e Irrigación hizo pública por

primera vez la Estrategia de Gestión de Recursos Hídricos con el objetivo de aumentar los recursos hídricos mediante la desalinización de 1.500 millones de metros cúbicos de agua en 2030 para su uso como agua potable³⁹. En septiembre de 2021 se promulgó una nueva ley sobre agua y saneamiento para preservar el agua y evitar su despilfarro⁴⁰.

Los recursos hídricos de Egipto tienen su origen fuera del territorio. El 97% proceden del Nilo Azul⁴¹ lo que ha sido fuente de tensiones con sus vecinos como las originadas por la construcción de la presa de renacimiento en Etiopía.⁴² Además, el 7,3% de la producción total de energía de Egipto procede de la energía hidroeléctrica. (Perez *et al.*, 2021).

La perspectiva de una disminución de este recurso vital para la población debido a los efectos del cambio climático plantea grandes retos de adaptación, dadas las tasas de crecimiento demográfico⁴³. Al igual que otros países del norte de África, el cambio climático agravará los problemas de seguridad alimentaria descritos anteriormente, ya que

38. <https://www.youm7.com/story/2019/2/10/اقل-مستن-ير-ال-غرازو/4134839>

39. <https://www.sis.gov.eg/Story/218138/عرتل-ان-يطلب-ال-غورشل?lang=ar>

40. <https://www.red-on-line.com/egypt-issues-law-no-147-of-2021-that-promulgates-the-new-law-of-water-resources-and-irrigation/>

41. <https://www.aren24.news/2022/10/12/eaux-du-nil-le-grand-barrage-de-la-discorde/>

42. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/07/sur-le-nil-le-barrage-de-la-renaissance-attise-la-guerre-de-l-eau_6087352_3212.html

43. <https://www.adaptation-undp.org/explore/northern-africa/egypt>

se prevé una disminución de los rendimientos debido al aumento de las temperaturas y la menor disponibilidad de agua.

Frente a la magnitud de los desafíos alimentarios y de abastecimiento de agua, las políticas agrícolas y alimentarias en Egipto mantienen, en gran medida, las orientaciones de las décadas anteriores. Un modelo similar a las políticas agrícolas adoptadas por sus vecinos con un proceso de concentración de tierras en manos de unos pocos grupos agroindustriales que se beneficia de las grandes inversiones nacionales y extranjeras y que acapara gran parte de los recursos hídricos. Esta agricultura intensiva orientada a la exportación margina a los pequeños agricultores con un proceso de acaparamiento de tierras. En 2002 el 91% de los agricultores egipcios disponían de tierras de menos de 2 hectáreas (50,5% de la tierra agrícola) mientras que el 3% restante disponía de tierras con una superficie superior a 40 hectáreas (33,5% de la tierra cultivable). En Egipto entre 1997 y 2000, el 25% de la población agrícola perdió el acceso a sus tierras. La ley de 1996 puso fin al sis-

tema de arrendamiento de tierras a perpetuidad con un proceso que aceleró la liberalización de las tierras agrícolas (Ayeb y Bush, 2019).

Desde la llegada al poder del Presidente El-Sisi en 2013, las políticas agrícolas y alimentarias han tratado de promover proyectos agrícolas a gran escala, acompañados de importantes reformas jurídicas y legislativas que favorecen las inversiones del sector privado y de los grandes grupos agroalimentarios (Nour, 2023). Estos grandes proyectos han atarido importantes inversiones en el valle del delta del Nilo y forman parte del modelo de agricultura intensiva. El proyecto Toshka⁴⁴ ha captado 90.000 millones de dólares desde los años noventa; el desarrollo del Plan de Al Sisi 2015,⁴⁵ que pretende recuperar 1,5 millones de feddans (630.000 hectáreas) usando el 25% reservas de agua y que es gestionado por la Egyptian Rural Development Company, ha canalizado un capital 440 millones de dólares. El 75% de la superficie del proyecto se ha asignado a grandes inversores y sólo el 25% a pequeños agricultores.

Estos megaproyectos han contribuido a incrementar la deuda exter-

44. <https://www.presidency.eg/en/ايجيشوتةعزم-عورشمةيوقلا-عيراشملا/>

45. <https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/173472/Egypt/Politics-/Egypt-Sisi-to-launch--million-feddan-project-in-l.aspx>

na del país.⁴⁶ Su impacto económico es cuestionado (Suleiman, 2023) y la viabilidad de algunos de ellos se ha visto comprometida por la pandemia del Covid-19, como el de los Mil Pueblos (Soliman y Gaber, 2010). Otro ejemplo es el proyecto de un millón y medio de acres de 2014, que asigna el 75% de la superficie del proyecto a grandes inversores y el 25% a pequeños inversores y licenciarios.

También cabe destacar el creciente papel de empresas, en manos de militares, en los proyectos agrícolas, facilitando la transferencia de la propiedad de la tierra del Estado a inversores extranjeros⁴⁷ o a alguna de las empresas afiliadas a los militares, como los proyectos agrícolas en la zona de Toshka⁴⁸ y Owaynat, los proyectos de invernaderos en Beni Suef, Al-Minya y Maghara o los proyectos de piscicultura en los lagos del norte (Nour, 2023).

Otro aspecto destacable es la mayor presencia de fondos del Golfo en estos proyectos es otro aspecto destacable. En 2018, el Gobierno egipcio firmó un acuerdo con la Canal Sugar Company, filial del Grupo Al Ghurair de los Emiratos Árabes Unidos,

para destinar 191.000 acres en la región occidental de Minyar al cultivo de remolacha y establecer una planta de producción de azúcar. Siguiendo el modelo de agricultura intensiva de las décadas anteriores, “Egipto visión 2030”, lanzado en 2016, pretende aumentar la producción agrícola con la ayuda de sus socios del golfo (Qatar Environnement and Energy Reseach Institute QEERY) (Ben Mimoune, el Shehaby, 2023).

Estos proyectos abundan en las lógicas de desarrollo que han afianzado las desigualdades estructurales del sistema alimentario y agrícola de Egipto, y además sin tomar en cuenta los retos que plantea el cambio climático. Aunque el gobierno lanzó una Estrategia Nacional de Cambio Climático 2050 antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP 27), que el país acogió en noviembre de 2022, las orientaciones de su política agrícolas reflejan un nivel muy bajo de compromiso con esta agenda (Al-Shami, 2022).

46. La deuda externa de Egipto se ha disparado pasando de 46.100 millones de dólares a mediados de 2014 a 155.700 millones a mediados de 2022 (Suleiman, 2023).

47. En 2020, se promulgó el Decreto Presidencial n° 621 de 2020, por el que se asignaban 930.000 acres de tierras estatales a la Organización de Proyectos de Servicios Nacionales en la región de la Depresión de Toshka (TD) de las gobernaciones de Asuán y New Valley. <https://www.sis.gov.eg/Story/165154/Toshka-Al-Khair-Project?lang=en-us>

48. <https://enterprise.press/stories/2018/12/13/uaes-al-ghurair-and-murban-sign-shareholder-agreement-with-al-ahly-capital-for-usd-1-bn-sugar-factory-in-egypts-minya/>

*La seguridad alimentaria
en Libia, el factor agravante
del conflicto*

Libia, al igual que sus vecinos tiene una alta dependencia de las importaciones de alimentos. El 90% de las necesidades de consumo de cereales, principalmente trigo y cebada, depende de las importaciones (Ben Mimoune, el Shehaby, 2023). Su estructura económica basada en los ingresos procedentes de los hidrocarburos está muy expuesta a las variaciones de los precios de las materias primas. La elevada dependencia de Libia de las importaciones para su seguridad alimentaria la hace extremadamente vulnerable a variables exógenas, como las variaciones en los volúmenes de producción internacional, y las fluctuaciones de los precios internacionales de los alimentos. Una exposición que Libia puede compensar parcialmente con las exportaciones de hidrocarburos (REACH, 2022).

La inseguridad alimentaria de la población se ha visto agravada por la situación de conflicto que, desde el 2011, ha dado lugar a un sistema político fragmentado e inestable, de-

bilitando aún más la capacidad del Estado para garantizar el suministro de bienes esenciales a la población.

Además del frágil contexto político y de seguridad en Libia, las sucesivas crisis (pandemia y guerra en Ucrania) unidas al impacto del cambio climático han agravado las desigualdades, y exposición de los colectivos más vulnerables a los riesgos de inseguridad alimentaria. La proporción de personas en riesgo de inseguridad alimentaria ha aumentado del 29% en 2015 al 38% en 2019, y el 46% de los migrantes y el 22% de los desplazados internos se ven afectados⁴⁹. Según el Plan de Ayuda Humanitaria 2022, 803.000 personas seguían necesitando ayuda humanitaria en 2022⁵⁰. El mantenimiento del acuerdo de alto el fuego de octubre de 2020 ha contribuido a reducir en un 58% el número de desplazados internos, de 316.000 en octubre de 2020 a 134.000 en agosto de 2022⁵¹.

La combinación de choques internos y el conflicto ha desestructurado la economía libia y su sector agrícola. Aunque su contribución al PIB es modesta, el empleo en este sector representaba en 2019 el 16% de la población activa⁵² pero está re-

49. https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/libya_hrp2022_review_jan_dec2022.pdf

50. https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000146342

51. <https://reliefweb.int/report/libya/libya-humanitarian-response-plan-2022-review-june-2022>

52. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?end=2019&locations=MA-DZ-TN-LY-EG&start=2019&view=bar>

duciéndose. Según la evaluación multisectorial de necesidades de 2022, solo el 8% de los hogares se dedica actualmente a algún tipo de actividad agrícola, y el 38% de ellos afirma haber reducido estas actividades⁵³.

El conflicto ha reducido el acceso a las tierras y al agua, restringiendo aún más una base productiva ya escasa que limita las oportunidades o posibilidades de reducir la dependencia de las importaciones de alimentos, haciendo que la seguridad alimentaria de Libia dependa de variables exógenas (variaciones de los volúmenes de producción internacionales, fluctuaciones de los precios internacionales de los alimentos).

Libia es un país rentista cuya economía se sustenta en las exportaciones de hidrocarburos lo que en teoría le permite compensar el aumento de su factura alimentaria y su impacto en los precios al consumo. En 2020, los ingresos del petróleo representaban más del 50% del PIB libio. Aunque en menor medida, la economía libia también se beneficia del sector del gas, ya que el país es el cuarto productor de gas natural de África. Los hidrocarburos representaron más del 95% de las exportaciones libias en 2021⁵⁴.

Antes del estallido de la guerra en Ucrania, más del 60% del grano importado procedía de Rusia y Ucrania, lo que provocó un riesgo inmediato para la seguridad del suministro y un aumento de los precios de los productos básicos: entre diciembre de 2019 y abril de 2022, el coste de la harina de trigo aumentó un 81% y el del aceite vegetal, un 153%⁵⁵. El coste de los alimentos de la cesta básica ya registraba un incremento constante en el periodo anterior al inicio del conflicto, con un aumento del 19% a partir de diciembre de 2021, y del 22% a partir de enero de 2022.

Ante esta situación, la capacidad de respuesta del estado libio ha sido limitada. La fragmentación institucional ha paralizado su capacidad de actuación en materia de protección social. Los mecanismos institucionales existentes para compensar la subida de los precios mediante subvenciones, como el Fondo de Estabilidad de Precios (FSP) y las asociaciones de consumidores (jama'iyats), han dejado de funcionar desde finales de 2020⁵⁶, limitándose a un envío puntual de productos subvencionados a un número limitado de asociaciones de

53. <https://reliefweb.int/report/libya/multi-sector-needs-assessment-msna-key-multi-sectoral-findings-libya-november-2022>

54. <https://www.statista.com/topics/9253/oil-and-natural-gas-industry-in-libya/>

55. El precio de los grupos de alimentos a base de cereales, como la harina, aumentó un 23 %, el pan un 34 %, el cuscús un 83 % y la pasta un 47 %, mientras que el precio del aceite vegetal aumentó un 27 % entre enero y diciembre de 2022.

56. https://fscluster.org/sites/default/files/documents/221005_reach_libya_wheat-supply-chain-assessment_report-june-2022_public.pdf

consumidores en febrero de 2022 (REACH, 2022).

Antes de 2011, Libia destinaba el 4,4% de su PIB a su sistema de protección social financiado con ingresos redistribuidos a través de subsidios energéticos y transferencias de efectivo a miembros vulnerables de la población. Este sistema de protección social deja fuera a los colectivos más vulnerables como los desplazados internos y los retornados que tienen dificultades para reintegrarse en sus comunidades y acceder a los servicios esenciales.

El problema del agua es en el caso de Libia especialmente grave. Las reservas de agua dulce han ido reduciéndose debido a las consecuencias del cambio climático, pero también a factores relacionados con la mala gestión de los recursos hídricos: sobreexplotación, infraestructuras deficientes y falta de mantenimiento.

En Libia, la gestión de los recursos naturales ha estado estrechamente vinculada a un modelo político autoritario que intentó superar los obstáculos naturales mediante megaproyectos como el del Gran Río Artificial diseñado para transportar agua a través de una red de tuberías

subterráneas desde los profundos acuíferos del sur de Libia hasta las ciudades costeras del norte del país⁵⁷. La viabilidad y posterior gestión de estos grandes proyectos asociados a las ambiciones hegemónicas del líder libio Gadafi han dado lugar a muchos problemas como la dependencia de la subcontratación y el mantenimiento a constructoras extranjeras y la paralización de sus últimas fases (3 y 4) por el conflicto que asola el país desde el 2011 (Altaeb, 2021). Los recursos de agua dulce de Libia son muy limitados y proceden principalmente de cuatro acuíferos: Kufra, Sirt, Morzuk y Hamada; los tres últimos están a punto de agotarse. De hecho, los habitantes de esta región sufren una escasez absoluta de agua (menos de 500 m³ al año).

Aunque la población en Libia es menor, también ha crecido notablemente pasando de 1,4 millones de habitantes en 1960 a 6,9 millones en 2021, el 88,4% de la cual se concentra en zonas urbanas lo que repercute en la capacidad de abastecimiento de agua (Belhassan, 2022).

La fragmentación institucional⁵⁸, consecuencia del conflicto, ha debilitado la capacidad del Estado de ges-

57. <https://www.mei.edu/publications/whats-next-libyas-great-man-made-river-project>

58. Cinco Instituciones son competentes en la gestión de los recursos y políticas hídricas: la Autoridad General del Agua, las Autoridades de Ejecución y Gestión y Utilización del Agua del GMMRP, la Compañía General de Desalinización de Agua (GCWD), la Compañía General de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado (GWSSC), y la Dirección General de Medio Ambiente. (REACH, 2022)

tión de cuestiones esenciales como el agua o la protección social. La verticalidad de la toma de decisiones conduce a la sobreexplotación de los recursos, al mantenimiento de precios bajos para el consumidor y no permite un uso racional de este recurso escaso. También cabe desatacar la falta de inversión para garantizar la diversificación del abastecimiento a través de plantas desalinizadoras.

Estos problemas se ven agravados por las consecuencias del cambio climático que está afectando al país con un calentamiento más rápido que la media y con predicciones de un aumento de 2,2°C para 2040 y de 4°C para finales de siglo⁵⁹. También se prevé una disminución de las precipitaciones y un aumento de episodios climáticos intensos, así como una subida del nivel del mar. Dado que las zonas costeras urbanizadas son las más pobladas, esto podría afectar especialmente a ciudades como Bengasi y dañar las infraestructuras petrolíferas situadas en el litoral.

La crisis hídrica que afecta a todos los países de la región también podría agudizar las tensiones entre países ya inmersos en lógicas de rivalidad por la gestión de recursos compartidos,

como ocurre con la cuenca de Gadamés (acuífero septentrional)⁶⁰.

Aunque todos los países del norte de África han tenido trayectorias de desarrollo singulares, estrechamente vinculadas a los legados coloniales y a las políticas públicas posteriores a la independencia, todos comparten algunos rasgos comunes. Uno de ellos es, sin duda, el impacto que las crisis sucesivas han tenido sobre la situación socioeconómica de la población, especialmente en los sectores marginados de la población y en las regiones periféricas, agravando las desigualdades ya existentes. A pesar de las protestas antiautoritarias de 2011 que, además de reivindicaciones políticas, reclamaban un cambio de modelo de desarrollo que garantizara la justicia social y la dignidad, no se han cuestionado ni revisado en profundidad las políticas generadoras de esos desequilibrios. Por el contrario, se ha consolidado una agricultura de renta, en detrimento de un desarrollo rural más inclusivo, con procesos de desposesión, empobrecimiento y éxodo rural.

59. <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/libya/climate-data-projections>

60. En la actualidad, el sistema acuífero del norte del Sáhara es explotado por cerca de 8.800 puntos de agua, 6.500 en Argelia, 1.200 en Túnez y 1.100 en Libia. <https://www.afrik21.africa/afrique-face-au-stress-hydrique-la-gestion-durable-de-leau-souterraine-simpose/>



IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LAS CRISIS EN EL SECTOR ALIMENTARIO

Inseguridad alimentaria y descontento social

Los modelos de desarrollo agrícola extractivistas descritos en los apartados anteriores de este informe han provocado profundas injusticias sociales y fragmentación territorial. Su sostenibilidad es más cuestionada, cada vez, por sus coste sociales y medioambientales. La inadecuación de las respuestas estatales a las necesidades y aspiraciones políticas, económicas y sociales de la población ha dado lugar a crecientes expresiones de descontento.

2.1. BRECHAS SOCIALES Y DESIGUALDADES GEOGRÁFICAS Y SECTORIALES, IMPACTO DE GÉNERO, INSEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES

La acumulación de crisis externas ha agudizado los problemas económicos y sociales que ya existían en los países del norte de África: altas tasas de des-

empleo juvenil, desigualdades, fracturas sociales y geográficas y coberturas sociales limitadas. Se trata de escenarios de alto riesgo para la estabilidad política de los países de la región, debilitada desde 2011 por una continua contestación social, expresión de la caducidad de los contratos sociales incapaces de garantizar precios asequibles para los elementos básicos de la cesta de la compra. El sistema de subsidios a los precios está siendo cuestionado por su elevado coste y su insostenibilidad desde la perspectiva de los equilibrios presupuestarios. Los socios e instituciones financieras internacionales son los primeros en reclamar reformas profundas para dismantelar este costoso sistema de protección social. Sin embargo, el riesgo de estallido social paraliza a los gobiernos y limita su capacidad para emprender reformas estructurales en el sector agrícola como se ha expuesto en los apartados anteriores. Las políticas agrícolas adoptadas tras

las independencias han contribuido a fragmentar los espacios y las poblaciones entre zonas geográficas consideradas como útiles para el desarrollo económico y el resto del territorio. Las regiones periféricas concentran mayores índices de pobreza, desigualdad y desempleo juvenil (Thieux, 2022). Es en el ámbito rural donde la degradación de las condiciones de vida es más pronunciada.

En Túnez, el Programa Mundial de Alimentos estimaba que el 21% de la población en 2022 se encontraba bajo el umbral de pobreza y que las tasas de pobreza más elevadas se concentraban en las zonas rurales, sobre todo en el noroeste y suroeste del país donde a menudo superan el 33%⁶¹. Choques externos como la Covid-19 habían debilitado la ya precaria situación de los pequeños agricultores dependientes de los mercados semanales, cerrados durante la pandemia, para la venta de sus productos. Además, los pequeños agricultores han recibido menos ayudas del Estado ya que muchos de ellos también operan de manera informal. La mayor parte del apoyo (inyección de fondos públicos y ayudas fiscales) fue captado por las grandes sociedades agrícolas (Amouzai y Kay, 2023).

Es en el ámbito rural donde se registran también peores resultados en cuanto a los indicadores de salud. Por ejemplo, en Túnez se observa una diferencia de dos puntos en la prevalencia del retraso del crecimiento infantil entre las zonas urbanas (7,5%) y las rurales (9,5%) (Azzam y Mondher, 2022).

Aunque la lucha contra la pobreza en Marruecos ha avanzado mucho, el 19% de la población rural sigue viviendo en situación de pobreza.⁶²

Las disparidades regionales quedan reflejadas en la tasa de pobreza por regiones. Esta última es siete veces más elevada en la región de Drâa-Tafilalet (14,6%) que en la región del Gran Casablanca (2%). Los mismos contrastes se observan en el índice GINI, con una diferencia de 10 puntos entre la región donde las desigualdades son mayores, Béni Mellal-Khénifra, y las regiones donde son menores como Rabat-Salé-Kenitra (Oxfam, 2019).

Las desigualdades territoriales son también muy importantes en Argelia como lo demuestra la diferente contribución de las regiones al PIB nacional. Excluyendo el sector de los hidrocarburos, el 40% del PIB procede de las regiones del lito-

61. Existen fuertes contrastes en la tasa de pobreza entre ciudades 3,5% en Túnez capital comparado con 34,9% en Qairuán.

62. La población situándose por debajo del umbral de la pobreza se redujo de 4.461.000 en 2001 a 2.755.000 en 2007 y a 1.605.000 en 2014. Mientras que la pobreza de ingresos ha sido prácticamente erradicada en las zonas urbanas, casi uno de cada diez habitantes de las zonas rurales sigue siendo pobre. (OXFAM, 2019).

ral, mientras que el sur del país y las altas mesetas, pese a albergar el 28% de la población, solo aportan el 6% del PIB. Además, una parte mínima de los ingresos generados por los hidrocarburos es canalizada por estas regiones se estiman que menos del 10%. (Khaoua, 2019). Estas regiones siguen estando a la cola en cuanto a indicadores relativos a las condiciones de vida de la población. Las tasas de desempleo lo atestiguan: 19,4% en la región del centro-oeste, 24,1% en Qairuán, 15,3% a nivel nacional y 40% en el grupo de edad de 25 a 29 años.

La marginación de la agricultura de subsistencia y la apuesta por una agricultura intensiva modernizada ha ido reduciendo las oportunidades de empleo en el ámbito rural. A las tasas elevadas de desempleo hay que sumar el carácter precario e informal del empleo.

Las importantes desigualdades de género en las zonas rurales y en la agricultura aumentan el riesgo de inseguridad alimentaria para las mujeres, a pesar del papel clave que desempeñan en la seguridad alimentaria de sus familias. Con un poder de decisión muy limitado debido a las normas patriarcales, su acceso a los factores de producción tam-

bién es reducido, con el acceso a la propiedad de la tierra limitado por una legislación discriminatoria, así como el acceso al crédito y los insumos. En Túnez, el porcentaje de explotaciones agrícolas propiedad de mujeres se estimaba en un 6,4% en 2015, frente al 12,1% en los países en desarrollo, el 12,8% a nivel mundial y el 15,4% en los países del África subsahariana. Esto revela las marcadas desigualdades a las que se enfrentan las mujeres rurales y el déficit de empoderamiento que sufren, a pesar de constituir la mayor parte de la mano de obra agrícola⁶³.

2.2. ESTRATEGIAS DE CONFRONTACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SOCIEDAD CIVIL: DINÁMICAS SOCIALES, PROTESTAS Y MIGRACIONES

Las protestas sociales en el norte de África tienen una larga historia, muchas de ellas relacionadas con los altos precios de los alimentos básicos, aunque reducirlas a la categoría de “revueltas del pan” es simplificador (enero de 1977 en Egipto; diciembre de 1983 y enero de 1984 en Túnez; 1986 y 1988 en Argelia; junio de 1981 en Marruecos). El acceso a precios

63. https://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/es/?sta_id=982

asequibles de los bienes de primera necesidad ha formado parte del contrato social que, desde las independencias, obliga a los Estados a garantizar un mínimo de bienestar social a su población y una redistribución de la renta a cambio de una delegación de sus derechos políticos.

Estas protestas no solo están motivadas por una reacción inmediata a los precios de los alimentos básicos como a menudo se escriben, sino que cuestionan más profundamente las decisiones políticas adoptadas y la gestión injusta de los recursos que condena a una gran parte de la población a la precariedad. Confluyen en cuestionar la gestión de los recursos naturales por parte de los gobiernos, así como el reparto injusto de las riquezas derivadas de su explotación.

Aunque la atención mediática se centró en el contexto de las “primaveras de 2011” en las protestas urbanas, las zonas rurales han sido y siguen siendo el escenario de múltiples protestas reivindicando un mejor acceso a la tierra y al agua, mejores condiciones laborales y una mayor remuneración para los trabajadores de la tierra (Hernando de Larramendi y Thieux, 2018). La ocultación del papel del campesinado en las “revoluciones árabes” y el peso de las protestas en las regiones periféricas han sesgado los diagnósticos y las respuestas de los responsables políticos nacionales

e internacionales. La contestación del modelo de desarrollo económico (tanto agrícola como de otros sectores) es una cuestión delicada que pone en tela de juicio también el modelo asimétrico de cooperación económica con la UE, principal socio comercial de los países norteafricanos.

En las regiones ricas en recursos naturales donde la extracción y la producción no han beneficiado a la población local, se han producido protestas sociales motivadas por el injusto reparto de los beneficios. Las malas condiciones laborales y la falta de transparencia en los procesos de contratación también estuvieron en el origen de unas protestas que han continuado después de 2011. Las reivindicaciones expresadas en las diferentes protestas sociales revelan la disfuncionalidad del Estado y las consecuencias negativas de los modelos de desarrollo adoptados, que no han hecho más que aumentar las desigualdades, la pobreza y las disparidades territoriales.

En Túnez, el epicentro de las protestas que empezaron a finales de 2010 con la inmolación del joven Mohamed Bouazizi, fue Sidi Bouzid. Esta localidad del interior del país ya había sido escenario de acciones colectivas de pequeños agricultores unos meses antes, reclamando un mejor acceso al agua (Jelloul, 2014). La cuenca minera de Gafsa en el sur del

país, ha sido escenario de continuas protestas desde el 2008 por la actuación de la Compañía de Fosfatos y su impacto social y medioambiental, denunciando la opacidad y corrupción de los procesos de contratación de la Compañía y la contaminación provocada por sus técnicas extractivas (Chouikha y Geisser, 2010).

La dinámica de protesta ha continuado después de 2011, sobre todo en las regiones afectadas por el extractivismo como las movilizaciones de El Kamour en la región meridional de Tataouine donde se concentra el 40 % del petróleo y el 20 % del gas del país (Hernando de Larramendi, 2021).

La explotación de estos recursos y sus consecuencias medioambientales fueron también el desencadenante de un movimiento de resistencia sin precedentes en Argelia. Las protestas contra la explotación del gas de esquisto desencadenadas en Ain Salah en 2015, en rechazo del impacto medioambiental de las técnicas de extracción del gas no convencional pusieron de manifiesto la existencia de nuevas dinámicas de acción colectiva, capaces de ejercer presión y

revertir, aunque sólo fuera temporalmente, las orientaciones de política económica del gobierno argelino.

En Marruecos, el impacto de la actividad minera sobre los medios de vida de la población también impulsó un movimiento popular en Imider en la provincia de Draa Tafilalet, en el sureste de Marruecos⁶⁴. El Mouvement sur la voie 96 lideró durante 5 años una protesta contra la Sociedad Metalúrgica de Imider (SMI). En el este de Marruecos, las protestas de Jerada (2018)⁶⁵ denunciaron las condiciones de trabajo en las minas clandestinas de la localidad, al tiempo que ponían de manifiesto los déficits en infraestructuras sanitarias y médicas y elevado coste de las tarifas de agua y electricidad. La desatención de los problemas económicos y sociales de estas regiones periféricas fue también uno de los detonantes de las movilizaciones del Rif en 2016 tras la muerte de Mohsen Fikri⁶⁶, (Chawqui, 2018).

La falta de acceso al agua también ha provocado numerosas protestas conocidas como “revueltas de la sed”: Farhana en Túnez en 2016,

64. <https://www.cadtm.org/Maroc-l-histoire-d-une-lutte-Le-mouvement-contre-la-mine-d-Imider-dure-depuis>

65. <https://www.jeuneafrique.com/541962/societe/maroc-face-a-la-contestation-sociale-a-jerada-le-ministere-de-linterieur-hausse-le-ton/>

66. Mohsen Fikri, atrapado por una máquina trituradora de basura mientras intentaba recuperar el pescado que las autoridades le acaban de confiscar fueron también la expresión de la indignación de la población frente a la percibida marginación sistémica de una región con deficientes accesos a los servicios esenciales y donde el desempleo alcanza niveles muy altos (Chawqui, 2018).

Zagora en Marruecos en 2017⁶⁷, Argel durante el verano de 2021⁶⁸, cortes de carreteras y manifestaciones en Dakhalia en Egipto en 2016⁶⁹. Entre 2007 y 2018 las protestas por el agua en Egipto se han multiplicado dando visibilidad a un movimiento de contestación que lleva activo en el Delta del Nilo desde 2007 (El Nour y Hussein, 2021; Azaola, 2021). Estas protestas denuncian las disfunciones del sector hidráulico (falta de planificación, corrupción, despilfarro e injusto reparto)⁷⁰.

El acceso a la tierra también ha sido un motor de movilización popular. En Túnez, por ejemplo, colectivos de agricultores sin tierra protagonizaron un movimiento de ocupación de tierras de las fincas estatales de gestión privada en manos de grupos o personas afines al gobierno⁷¹. Es el caso del palmeral de Jemna al sur del país, ocupado y gestionado colectivamente con éxito desde 2011 por una asociación lo-

cal⁷². Las movilizaciones populares en el ámbito rural también han sido muy numerosas en Marruecos. El acceso discriminatorio a las tierras comunales ha dado lugar a un movimiento de mujeres conocido como *Soulaliyyates*, que reivindica el derecho de las mujeres a las tierras comunales (Ramírez, 2017).

En el ámbito rural, las movilizaciones y protestas en Egipto han sido también muy numerosas, aunque han estado mucho menos mediatizadas que las protestas urbanas como las que tuvieron lugar en la plaza Tahrir en el Cairo en 2011. La protesta ha adoptado diferentes formas de acción colectiva contra las políticas agrícolas como sentadas, manifestaciones frente a edificios gubernamentales, bloqueo de carreteras o campañas de desobediencia civil para denunciar las políticas agrícolas aplicadas por el gobierno (Gana, 2015). Estas protestas relacionadas con la tierra se remontan a la década de 1990, lo que de-

67. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/10/13/dans-le-sud-marocain-des-manifestations-de-la-soif-contre-les-penuries-d-eau_5200650_3212.html

68. Varias manifestaciones y protestas han tenido lugar en varias localidades de Argelia como Lakhadria <https://www.tsa-algerie.com/pourquoi-les-habitants-de-lakhadria-ont-ferme-lautoroute-est-ouest/> y Argel <https://www.tsa-algerie.com/penu-rie-deau-nouvelles-manifestations-de-colere-a-alger/>

69. <https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/nos-enfants-vont-mourir-de-soif-les-penuries-deau-alimentent-les-manifestations-en>

70. El coste del agua que procede de las plantas de desalinización es de 60 dinares el m³ pero está facturado a 6 dinares el m³ (Charef, 2021).

71. <https://www.arenion24.news/2020/01/22/lagriculture-a-lepreuve-des-bouleversements-politiques-en-tunisie-lepuise-ment-dun-modele/>

72. <https://www.rfi.fr/fr/emission/20161211-jemna-experience-economie-sociale-solidaire-tunisie>.

muestra la continuidad temporal de unas movilizaciones que a menudo han quedado invisibilizadas.

La cuestión de la soberanía alimentaria ha dado lugar a nuevas iniciativas de la sociedad civil conectadas con otros movimientos internacionales como La Vía Campesina,⁷³ que cuenta con una larga trayectoria de lucha contra los estragos de las políticas liberales en el sector agrícola. Estas dinámicas van acompañadas de una reflexión liderada por centros de estudios como el Observatorio de la Soberanía Alimentaria y del Medioambiente (OSAE), que dirige un grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria desde 2017, y la Asociación Tunecina de Permacultura creada en 2013 (Ayari, 2022).

El modelo de desarrollo agrícola basado en la exportación promovido por los socios europeos también es cuestionado. El colectivo Block ALECA, formado por ocho asociaciones tunecinas, movilizó importantes protestas durante la cuarta ronda de negociaciones del Acuerdo Global y Profundo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Túnez, celebrada en Túnez en mayo de 2019, denunciando unos acuerdos que incrementarán la dependencia tunecina de los

mercados agrícolas internacionales (desmantelamiento de las barreras aduaneras, acaparamiento de tierras por empresas extranjeras, pérdida de soberanía alimentaria, etc.).

A nivel regional han surgido redes que pretenden reunir a diferentes movimientos y asociaciones en torno al hilo conductor de la lucha por la soberanía alimentaria como la Red Siyada: por la soberanía popular sobre los sistemas y recursos alimentarios⁷⁴.

73. Normalización política de la ocupación del palmeral en 2017. <https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=via+campesina&ie=UTF-8&oe=UTF-8>

74. <https://fr.siyada.org/siyada-board/suivi-des-luttes/petition-pour-la-liberation-du-prisonnier-politique-mohad-gasmi/>

33

LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA ANTE LAS CRISIS ALIMENTARIAS EN EL NORTE DE ÁFRICA

La vulnerabilidad de los sistemas agrícolas y alimentarios de los países del norte de África y su exposición a los choques externos son, en gran parte, consecuencia de la continuidad de modelos de desarrollo agrario cuya sostenibilidad social y medioambiental está cada vez más cuestionada. La Unión Europea y España, como socios privilegiados en la cooperación económica y comercial con estos países, han contribuido a través de los modelos de asociación propuestos, a consolidar estas estrategias de desarrollo. Al mismo tiempo, las consecuencias sociales de las crisis alimentarias estructurales y crónicas tienen consecuencias directas para Europa. Alejan cada vez más el horizonte de un espacio compartido de paz, estabilidad y prosperidad y alimentan tensiones sociales que pueden exacerbar la inestabilidad política de la región. Aunque la UE y sus Estados miembros han respondido a través de diferentes mecanismos financieros para mitigar los efectos de las crisis alimentarias en

sus vecinos, aún no han revisado sus estrategias a más largo plazo, como el comercio, por ejemplo, para acompañar a sus socios en la adopción de reformas estructurales que permitan avanzar hacia modelos más sostenibles de agricultura y desarrollo rural.

En respuesta a las crisis que amenazan la seguridad alimentaria de los países de la vecindad sur, la UE adoptó medidas de urgencia. Bajo la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea se adoptó la iniciativa FARM⁷⁵ (Food and Agricultural Resilience Mission) con el objetivo de establecer un plan de urgencia comercial en colaboración con otras organizaciones internacionales como la Unión Africana, mediante la instauración de un sistema de solidaridad que permitiera liberar los excedentes de algunos países productores para distribuirlos equitativamente entre los países más necesitados. Esta iniciativa preveía también el desembolso de ayuda financiera a los países más dependientes para permitirles

75. <https://www.jeuneafrique.com/1333750/economie/crise-alimentaire-comment-lua-et-lue-veulent-faire-face/>

aumentar su propia producción. En junio de 2022, se anunció un desembolso de 600 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo⁷⁶.

El Mecanismo Alimentario y de Resiliencia regional con un presupuesto de 225 millones de euros tienen por objeto hacer frente a las necesidades a corto y medio plazo de los socios de la Vecindad Meridional. A corto plazo es un instrumento para responder a las situaciones de emergencia relacionadas con la escasez de productos básicos, contribuir a la estabilización de la balanza de pagos, apoyar la protección social local y los sistemas de redes de seguridad social que se enfrentan a una crisis aguda adicional. A medio y largo plazo pretende sostener las agriculturas locales y apoyar el desarrollo de prácticas agrícolas menos intensivas en insumos y más sostenibles y adaptadas al clima mediante la adopción de variedades, cultivos y prácticas agrícolas menos intensivas en agua⁷⁷.

Acuerdos de Libre Comercio Amplios y Profundos

En el marco de la Asociación establecida por la UE con los países del

Mediterráneo desde el lanzamiento del proceso de Barcelona en 1995, los objetivos de creación de un área de libre comercio y la liberalización de los intercambios en el sector agrícola y la movilidad humana han sido un capítulo aparte sujeto a múltiples restricciones. La entrada de productos agrícolas de los países del norte de África (Marruecos en particular) en competencia con los sectores agrícolas de los países del sur de Europa se ha visto dificultada por el levantamiento sólo parcial de las barreras arancelarias, el establecimiento de calendarios, normas sanitarias precios de entrada y la invocación del principio de preferencia comunitaria.

Con Marruecos, Túnez y Egipto, la UE está negociando desde diciembre de 2011 la firma de Acuerdos de Libre Comercio Amplios y Profundos (DCFTAs, por sus siglas en inglés) con el objetivo de liberalizar nuevos sectores, como la inversión, los servicios y la agricultura. Además de eliminar aranceles, esta nueva generación de acuerdos pretende reducir y armonizar las normas.

Desde que en 2015 comenzaron las negociaciones con Túnez, la sociedad civil tunecina se ha opuesto constantemente a la firma del acuerdo,

76. En el marco del instrumento NDCI está previsto el desembolso de 5 millones para Argelia, 100 millones de euros para Egipto, 15 millones para Marruecos, 20 millones de euros para Túnez <https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/food-security-and-affordability/>

77. <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/how-eu-countries-are-addressing-the-global-food-crisis/>

destacando las consecuencias sociales y medioambientales que generaría. El levantamiento de las medidas de protección y regulación según esta lógica liberal somete también la actividad agrícola y la capacidad de competir en un mercado europeo que mantiene numerosas barreras no arancelarias para los productos procedentes del Sur (normas sanitarias) lo que altera las condiciones reales del libre mercado (Nubukpo, 2021). Numerosos informes subrayan las consecuencias negativas que la firma de estos acuerdos tendría para Túnez en el sector agrícola, señalando que el desarme arancelario será menos costoso para la Unión Europea. En cambio, la imposición de barreras no arancelarias (normas sanitarias y fitosanitarias europeas) tendrá un alto coste para los agricultores tunecinos⁷⁸.

Otro efecto negativo que afianzará las dinámicas negativas para la seguridad alimentaria y la lucha contra el cambio climático en estos países es el debilitamiento y la marginación de la agricultura familiar y campesina, con el riesgo de acaparamiento de tierras por parte de inversores europeos mejor posicionados para adquirirlas y para desplegar importantes medios de producción, profundizando así en una lógica que,

al favorecer la agricultura intensiva en capital y recursos destinada a la exportación, ahoga aún más la agricultura a pequeña escala, que es una vía más sostenible para garantizar la soberanía alimentaria de estos países. La lógica de la liberalización comercial socava además la capacidad de intervención y la autonomía de las políticas públicas de estos países para orientar los sistemas productivos locales hacia la satisfacción de la demanda interna.

A pesar de los impactos sociales y medioambientales negativos y de la adopción de otras estrategias y líneas de actuación para afrontar los retos del cambio climático en la región, se observa una lógica continuista en lo que respecta a las políticas alimentarias y agrícolas dentro de la agenda por el Mediterráneo. La UE sigue apostando por las lógicas comerciales. El documento «Asociación renovada con los países vecinos meridionales - Plan económico y de inversión para los países vecinos meridionales», publicado por la Comisión Europea el 9 de febrero de 2021 señala también la necesidad de reforzar la integración regional de los mercados en el marco de la zona de libre comercio del continente para abordar la cuestión de la seguridad alimentaria.⁷⁹ El

78. https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN28_Tunisia_DCFTA.pdf

79. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0002>

paradigma dominante que aboga por las soluciones comerciales refuerza también la idea de que el mercado sigue siendo la solución. La lógica liberal también otorga un papel limitado al Estado que, sin embargo, sigue siendo un actor central en la búsqueda de soluciones a los problemas del agua a través de una gestión de los recursos más eficaz y sobre todo más justa y sostenible (Moreno-Dodson, 2022).

En las iniciativas de cooperación con el Mediterráneo y el norte de África en particular, España ha desempeñado un papel destacado. El objetivo de crear un área de paz, estabilidad y prosperidad compartida, objetivo principal de la Declaración de Barcelona de 1995 dista mucho de haberse alcanzado. La multiplicación de crisis que afectan tanto a la UE como a la orilla sur del Mediterráneo ha provocado, en el caso de España, una menor capacidad de acción en la región. La crisis financiera de 2008 ha reducido al máximo la ayuda oficial al desarrollo de España a la región, y las prioridades dictadas por un proceso de securitización de su agenda, han desviado también la atención de ámbitos de actuación como la seguridad alimentaria y la búsqueda de modelos de desarrollo agrícolas y rurales más justos y equitativos. La lógica vertical y asimétrica de los modelos europeos

de cooperación establecidos con los países del Mediterráneo sur prevalece también en el marco bilateral. España ha apostado por Marruecos en sus relaciones con la región, y las iniciativas destinadas a otros países son mucho más modestas, como demuestra, por ejemplo, en el sector de la seguridad alimentaria, la asignación de fondos de AOD a los países de la región en los últimos años.

En el ámbito multilateral, España participa como miembro de la Unión Europea en diferentes programas de cooperación con los países del Magreb en materia de agricultura y desarrollo rural y ha desarrollado también iniciativas bilaterales que abordan cuestiones claves como el agua. El programa Masar Agua⁸⁰ es una iniciativa que busca mejorar la seguridad hídrica y la calidad del agua en la región así como promover el uso sostenible y equitativo de los recursos hídricos. Aunque la búsqueda de soluciones técnicas y la mejora de las capacidades de gestión son, sin duda, importantes, la cuestión de la seguridad alimentaria requiere un abordaje más amplio y una reflexión sobre la sostenibilidad de los modelos políticos, económicos y comerciales que estructuran las relaciones de España con el norte de África.

80. <https://cpage.mpr.gob.es/producto/programa-masar-agua/>

La presidencia española del Consejo Europeo para el segundo semestre de 2023 es una oportunidad para volver a situar a la región en el centro de las prioridades europeas y promover iniciativas que puedan ayudar a

los estados del norte de África a hacer frente a los retos que plantea el deterioro de los medios de vida de la población y de su seguridad alimentaria en particular.

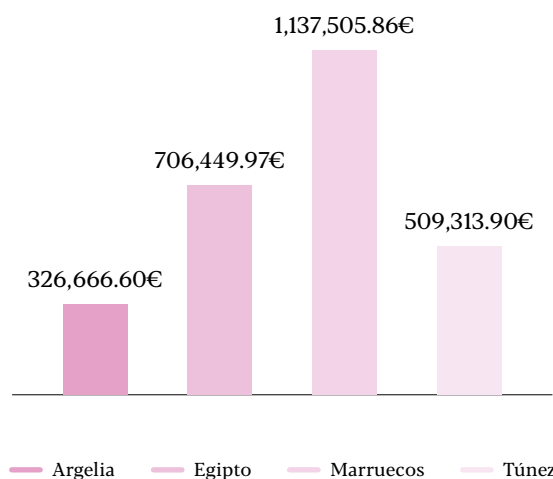


Figura 2: AOD destinada a diferentes sectores relacionados con la Seguridad Alimentaria (2018-2020). (Agua, saneamiento, agricultura, silvicultura, protección general del medio ambiente, Ayuda alimentaria).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos <https://infoaod.maec.es>.

4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las crisis alimentarias crónicas que padecen los países del norte de África son el resultado del fracaso estructural de un sistema agrícola y alimentario mundial profundamente desigual, basado en modelos extractivos muy costosos desde la perspectiva de la seguridad humana y del medio ambiente. La acumulación de crisis exige con urgencia una revisión de las políticas alimentarias y agrícolas. Sin embargo, las respuestas de los Estados han consistido en tratar de contener el descontento social provocado por la degradación continua de las condiciones de vida de una parte de la población, pero no han emprendido reformas de calado para hacer que sus sistemas alimentarios y agrícolas garanticen más equidad y justicia en el acceso asequible, sano y estable a los alimentos que necesitan.
- Los Estados del norte de África se enfrentan a condicionantes materiales importantes que limitan su capacidad de aumentar su producción (disminución constante de las tierras cultivables y drástica reducción de los recursos hídricos disponibles) para satisfacer las crecientes necesidades alimentarias debidas a la dinámica demográfica (como en el caso de Egipto). La inestabilidad política, como en el caso de Túnez, también paraliza la capacidad de los gobiernos para emprender reformas estructurales de sus sistemas agrícolas (abordando cuestiones claves como la propiedad de la tierras) y oscilan entre la compra de la paz social, las medidas represivas y la retórica populista para contener la dinámica de contestación y resistencia popular que cuestiona los modelos agrícolas y alimentarios.
- Las perturbaciones en las cadenas de suministro (impacto de la crisis sanitaria y de la guerra en Ucrania) ha reabierto el debate sobre la soberanía alimentaria y la necesidad de una profunda transformación del sistema de dependencia asimétrico de los mercados agrícolas europeos. Aunque el comercio sigue siendo la solución preconizada por la UE e instituciones internacionales especializadas como la FAO para mejorar la seguridad

alimentaria de estos países, la lógica comercial agrava los problemas sociales y medioambientales de los modelos agrícolas dominantes en la región.

- Las respuestas de emergencia son necesarias, pero no suficientes para hacer frente a estas crisis multidimensionales que van a ser cada vez más recurrentes en la región. La activación de mecanismos de cooperación y solidaridad es más necesaria que nunca, y el apoyo financiero debe dar prioridad a los impactos sociales y medioambientales de los proyectos promovidos (empleo digno en zonas rurales, modelos agroecológicos sostenibles, innovaciones tecnológicas que puedan contribuir a una mejor gestión de los recursos). Un aspecto fundamental de esta cooperación debería incluir la participación efectiva de la sociedad civil y, en particular, de los movimientos menos visibles o menos integrados en los circuitos internacionales de reflexión, como las organizaciones campesinas y de mujeres de las zonas rurales, que son las protagonistas de la creación de modelos agrícolas más sostenibles, basados en circuitos más cortos y adaptados a las necesidades alimentarias locales.

A medio y largo plazo, tanto la UE como España deberían revisar sus modelos de cooperación con el norte de África, tratando de no retrasar el horizonte de integración regional. En el ámbito agrícola, la promoción de modelos de cooperación y solidaridad entre los Estados del Magreb podría ser muy beneficiosa.

Algunas iniciativas de la sociedad civil han avanzado en esta dirección creando redes en torno a la necesidad de luchar por la soberanía alimentaria, un reparto más justo de los recursos y modelos de lucha contra el cambio climático y sus efectos negativos.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES







BIBLIOGRAFÍA

- Abis, Sébastien, y Diane Mordacq. 2022. «La fragilité alimentaire mondiale et la guerre d'Ukraine:» *Politique étrangère* Automne(3): 25-37. <https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2022-3-page-25.htm?ref=doi> (24 de marzo de 2023).
- Agence Ecofin. «L'Égypte maintient l'accord d'achat de blé indien malgré les restrictions à l'export». <https://www.agenceecofin.com/cereales/2408-100518-l-egypte-maintient-l-accord-d-achat-de-ble-indien-malgre-les-restrictions-a-l-export> (25 de marzo de 2023).
- Ali Amouzai et Sylvia Kay. 2023. «Surmonter La Crise de Covid-19 Avec Équité | Transnational Institute». <https://www.tni.org/en/publication/towards-a-just-recovery-from-the-covid-19-crisis> (25 de marzo de 2023).
- Al-Shami, Salma. 2022. «Food Insecurity and Its Discontents in the Middle East and North Africa».
- Amr Emam. 2022. «How Russian Invasion of Ukraine Threatens Wheat Supplies in North Africa». *Middle East Eye*. <http://www.middleeasteye.net/news/egypt-ukraine-russia-wheat-north-africa> (13 de abril de 2023).
- Arezki Saïd. 2023. «En Algérie, “ l'eau, c'est comme le pétrole, il faut l'utiliser à bon escient ” – Jeune Afrique». *JeuneAfrique.com*. <https://www.jeuneafrique.com/1408296/societe/en-algerie-leau-cest-comme-le-petrole-il-faut-l-utiliser-a-bon-escient/> (12 de abril de 2023).
- Ayari, Khouloud. 2022. «War in Ukraine and Food Insecurity in Tunisia: Where Is Reform Most Needed?»
- Ayeb, Habib, y Ray Bush. 2019. *Food insecurity and revolution in the Middle East and North Africa: agrarian questions in Egypt and Tunisia*. London ; New York, NY: Anthem Press.
- Ayeb Habid. 2022. «La crise alimentaire actuelle ; Ou quand la guerre en Ukraine rappelle la dépendance alimentaire structurelle de la Tunisie». *OSAE*. <https://osae-marsad.org/2022/04/04/la-crise-alimentaire-actue>
- lle-ou-quand-la-guerre-en-ukraine-rappelle-la-dependance-alimentaire-structurelle-de-la-tunisie/ (13 de abril de 2023).
- Ben Hassen, Tarek, y Hamid El Bilali. 2022. «Impacts of the Russia-Ukraine War on Global Food Security: Towards More Sustainable and Resilient Food Systems?» *Foods (Basel, Switzerland)* 11(15): 2301.
- Berrada, El Mehdi. 2020. «Aziz Akhannouch lance le plan “ Génération Green ” – Jeune Afrique». *JeuneAfrique.com*. <https://www.jeuneafrique.com/896496/economie/aziz-akhannouch-lance-le-plan-generation-green/> (12 de abril de 2023).
- Bessaoud, Omar. 2006. «La stratégie de développement rural en Algérie». *Options méditerranéennes, série A* 71: 79-89.
- Brésillon Thierry. 2023. «Tunisie : le pari risqué du souverainisme économique de Kais Saïed». *Middle East Eye édition française*. <http://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/economie-tunisie-crise-fmi-souverainisme-kais-saied> (14 de abril de 2023).
- Brun, Matthieu. 2023. «Afrique : le retour de la faim ?»: *Politique étrangère* Printemps(1): 139-50. <https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2023-1-page-139.htm?ref=doi> (25 de marzo de 2023).
- Chahir Aziz. 2023. «Mohammed VI : qu'a-t-il fait pour les pauvres au Maroc ?» *Middle East Eye édition française*. <http://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/maroc-manifestations-pauvrete-roi-mohammed-6-economie-gouvernance> (13 de abril de 2023).
- Deen, Sherif Mohy El. 2022. «EGYPT'S WATER POLICY AFTER THE CONSTRUCTION OF THE GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM».
- FAO, IFAD, UNICED, WHO, ESCWA. 2023. *Near East and North Africa – Regional Overview of Food Security and Nutrition 2022*. FAO; IFAD; UNICEF; WHO; ESCWA (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia); WFP; <http://www.fao.org/documents/card/en/cc4773en> (12 de abril de 2023).

Frida Dahmani, Fahd Iraqi, Zahra Rahmouni. 2020. «Maroc, Algérie, Tunisie : les États face au défi de la sécurité alimentaire – Jeune Afrique». *JeuneAfrique.com*. <https://www.jeuneafrique.com/941185/societe/maroc-algerie-tunisie-les-etats-face-au-defi-de-la-securite-alimentaire/> (12 de abril de 2023).

Ghanem, Hafez. 2015. «Agriculture and rural development for inclusive growth and food security in Morocco». *Brookings Global Working Paper Series*.

Hamadi, Ryad. 2021. «Djaaboub traite la France d'«ennemi traditionnel et éternel » de l'Algérie». *TSA*. <https://www.tsa-algerie.com/djaaboub-traite-la-france-dennemi-traditionnel-et-eter-nel-de-lalgerie/> (12 de marzo de 2023).

Hernando de Larramendi, M, y L Thieux. 2018. «Protestas en la periferia. Contestación y desequilibrios en el Magreb», *Notes Internationals*, n. o 203, CIDOB, 2018».

Joël Té-Léssia Assoko. 2022. «Céréales : l'Algérie veut compter sur son “ stock de sécurité ” – Jeune Afrique». *JeuneAfrique.com*. <https://www.jeuneafrique.com/1325622/economie/cereales-lalgerie-veut-compter-sur-son-stock-de-securite/> (12 de abril de 2023).

Jouili, Mustapha, y Mohamed Elloumi. 2022. «Extraversion versus développement agricole autocentré: Le cas des pays du Maghreb». *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*: 1-20. <https://doi.org/10.1080/02255189.2022.2092459>.

Mahjoub, O., M. T. Chaibi, y M. A. Shamseddin. 2021. «Water Resource Availability and Quality in the North Africa Region Under Climate Change». En *Climate Change and Water Resources in Africa: Perspectives and Solutions Towards an Imminent Water Crisis*, eds. Salif Diop, Peter Scheren, y Awa Niang. Cham: Springer International Publishing, 29-54. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61225-2_3 (23 de marzo de 2023).

Majed Mandour. 2023. «Sisi's Futile Struggle with Inflation». *Carnegie Endowment for International Peace*. <https://carnegieendowment.org/sada/89499> (12 de abril de 2023).

Maroc.ma. 2022. «PLF-2023 : 26 MMDH pour la Caisse de compensation». *Maroc.ma*. <https://www.maroc.ma/fr/actualites/plf-2023-26-mmdh-pour-la-caisse-de-compensation> (12 de abril de 2023).

Maussion Estelle. 2023. «Au Maroc, l'impossible réforme de la politique agricole – Jeune Afrique». *JeuneAfrique.com*. <https://www.jeuneafrique.com/1411894/economie/au-maroc-limpossible-reforme-de-la-politique-agricole/> (12 de abril de 2023).

Mebtoul Abderrahmane. 2023. «Les Cinq Raisons Du Processus Inflationniste et Son Impact Sur Le Pouvoir d'achat Des Algériens». *El watan*. <https://elwatan-dz.com/les-cinq-raisons-du-processus-inflationniste-et-son-impact-sur-le-pouvoir-dachat-des-algeriens> (13 de abril de 2023).

MedECC. 2020. *Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin – Current Situation and Risks for the Future. First Mediterranean Assessment Report*. Zenodo. <https://zenodo.org/record/7224821> (11 de abril de 2023).

Menzli Ayab. 2022. «Tunisia's IMF Deal: The Country's Subsidies Under Threat». <https://timep.org/2022/12/21/tunisias-imf-deal-the-countrys-subsidies-under-threat/> (14 de abril de 2023).

Metboul, Aberrahmane. 2023. «La stratégie de l'Algérie face à la crise alimentaire qui est une menace pour la sécurité mondiale – L'Echo d'Algérie A la une». *L'Echo d'Algérie*. <https://www.lechodalgerie.dz/la-strategie-de-lalgerie-face-a-la-crise-alimentaire-qui-est-une-menace-pour-la-securite-mondiale/> (13 de abril de 2023).

Mokena Lahcen. 2020. «Morocco's King Launches "Green Generation 2020-2030"». *Asharq AL-awsat*. <https://english.aawsat.com/home/article/2132676/moroccos-king-launches-green-generation-2020-2030> (7 de abril de 2023).

Nejla Ben Mimoune, Hana el Shehaby. 2023. «Breaking the Cycle: How Can the MENA Region Tackle Food Insecurity?» *Middle East Council on Global Affairs*. <https://mecouncil.org/publication/breaking-the-cycle-how-can-the-mena-region-tackle-food-insecurity/> (9 de marzo de 2023).

Nour, Saker El. 2023. «WHAT CHANGED AND WHAT DIDN'T».

Perez, Nicostrato D. et al. 2021. *Climate Change and Egypt's Agriculture*. 0 ed. Washington, DC: International Food Policy Research Institute. <https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/134318> (12 de abril de 2023).

Pouch, Thierry, y Marine Raffray. 2022. «L'agriculture par temps de guerre». *L'Économie politique* 94(2): 84-95. <https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2022-2-page-84.htm>.

«Prix du pain : l'Algérie dans le top 3 mondial». 2023. TSA. <https://olcnbvc4jz.com/prix-du-pain-lalgerie-dans-le-top-3-mondial/> (25 de marzo de 2023).

Rachid Bouanani. 2022. «The Gold Rush for Morocco's Phosphate in the Ukraine War Aftermath». *Middle East Eye*. <http://www.middleeasteye.net/news/morocco-gold-rush-fertilizers-war-ukraine> (13 de abril de 2023).

REACH. 2022. «Libya: Assessment of the Libyan Wheat Supply Chain - Quantitative and Qualitative Assessment of the Short-Term Impact of the Escalated Conflict in Ukraine on the Libyan Wheat Supply Chain (June 2022) - Libya | ReliefWeb». <https://reliefweb.int/report/libya/libya-assessment-libyan-wheat-supply-chain-quantitative-and-qualitative-assessment-short-term-impact-escalated-conflict-ukraine-libyan-wheat-supply-chain-june-2022> (25 de marzo de 2023).

Rédha Younes Bouacida. 2023. «Insécurité Alimentaire Dans Les Pays Arabes : Les Solutions Pour Promouvoir Une Agriculture Durable». *El watan*. <https://elwatan-dz.com/insecurite-alimentaire-dans-les-pays-arabes-les-solutions-pour-promouvoir-une-agriculture-durable> (12 de abril de 2023).

Sraïri, Mohamed Taher. 2022. «Rethinking the Agricultural Development Model in Post-COVID-19 Era Based on Scientific Knowledge: The Moroccan Case». En *Food Security and Climate-Smart Food Systems*, eds. Mohamed Behnassi et al. Cham: Springer International Publishing, 33-49. https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-92738-7_3 (23 de marzo de 2023).

Tanchum, Michael. 2021. «The Fragile State of Food Security in the Maghreb: Implication of the 2021 Cereal Grains Crisis in Tunisia, Algeria, and Morocco». *MEI* 9.

Vecchio, Kévin Del, y Marcel Kuper. 2022. «La mise en visibilité des eaux souterraines au Maroc : un processus historiquement lié aux politiques de développement de l'irrigation». *Développement durable et territoires* (Vol. 12, n°3). <http://journals.openedition.org/developpementdurable/19675> (12 de abril de 2023).

BIOGRAFÍA

Laurence Thieux

Profesora ayudante doctor del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid. Es Doctora en estudios internacionales mediterráneos por la Universidad Autónoma de Madrid con una especialidad en estudios árabes e islámicos. Es investigadora asociada del Grupo de Estudio sobre las sociedades árabes y musulmanas (GRESAM) de la Universidad Castilla-la Mancha y del Grupo de Investigación Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio (GICMOM).

Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida, grabada o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de la Fundación Alternativas.

Coordinación

Vicente Palacio

Edición de textos

© los autores

Documentación

© los autores

Diseño Gráfico

Álvaro López Moreno de Cala

© de los textos: sus autores

© de esta edición: Fundación Alternativas, 2023

© de las imágenes: sus autores

© Laurence Thieux

ISBN: 978-84-18677-83-0

Depósito legal: M-15516-2023

La guerra en Ucrania, sumándose a las crisis anteriores, ha tenido un fuerte impacto sobre los países de Norte de África dependientes de los mercados mundiales para alimentar a su población. La inflación y la perturbación de las cadenas de suministro han agudizado las crisis económicas y sociales y los riesgos de inseguridad alimentaria de las franjas más vulnerables de la población de esta región incrementando las fracturas territoriales y las desigualdades.

Este documento, a cargo de *Laurence Thieux*, Profesora ayudante doctor del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid, trata de arrojar luz sobre las causas estructurales de las crisis de los sistemas alimentarios y agrícolas de algunos países del norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto). Se analiza también sus consecuencias y la contestación de unos modelos de desarrollo agrícola cuya sostenibilidad es cada vez más cuestionada por las injusticias sociales que conllevan y el uso desmedido de recursos naturales cada vez más exigüos por el cambio climático.